

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2022075736-004-000

Fecha: 2022-09-06 18:49 Sec.día 1000

Anexos: No

Trámite:: 125-ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO SANCIONATORIO

Tipo doc:: 80-RESOLUCIONES

Remitente: 540000- DELEGATURA PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Destinatario:: ATM133706-MARYOIRY LILIANA AVILA RUBIO

RESOLUCIÓN NÚMERO 1170

(6 de septiembre de 2022)

Por la cual se impone una sanción

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (E)

En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las que le confieren los artículos 107 y 209 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), así como de la señalada en el numeral 3 del artículo 11.2.1.4.29. del Decreto 2555 de 2010, y conforme a las reglas pertinentes del régimen sancionatorio contemplado en el numeral 4 del artículo 208 del mismo Estatuto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. – Que mediante Resolución No 1713 del 11 de diciembre de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC) autorizó el funcionamiento de la sociedad Movii S. A. Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (en adelante Movii o la Entidad Vigilada), en el mercado financiero colombiano. El certificado de existencia y representación legal de la Entidad Vigilada determina que su representación estará a cargo del “Gerente General de la Sociedad” el cual será de libre nombramiento por parte de la Junta Directiva, señalando dentro de sus funciones, entre otras: “a) Representar legalmente a la Sociedad judicial o extrajudicialmente” así como, “f Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la Sociedad”.

Mediante oficio radicado con el No. 2018009398-000 del 25 de enero de 2018, la Secretaría del Comité de Posesiones de la SFC informó a MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, que “(...) en sesión celebrada el día 18 de enero de 2018, autorizó la representación legal como Gerente General de Movii S.A Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos” y que de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Decreto 2150 de 1995, con dicha autorización se entiende surtida la diligencia de posesión y prestado el juramento respectivo al cargo de “Gerente General”, a partir del 18 de enero de 2018.

SEGUNDO. - Que mediante Oficio radicado con el No 2022038813-000 del 23 de febrero de 2022, la SFC formuló Pliego de Cargos Personales a MARYOIRY ÁVILA RUBIO en su condición de Representante Legal (en adelante RL) de Movii, sobre los hechos que fueron indicados en dicho acto administrativo, los cuales serían constitutivos de infracciones a las disposiciones allí citadas.

TERCERO. - Que en el Oficio de Pliego de Cargos se le concedió a MARYOIRY ÁVILA RUBIO un plazo improrrogable de treinta (30) días hábiles para rendir explicaciones por los hechos y razones de derecho que allí se expusieron, de conformidad con lo dispuesto por el literal h) del numeral 4° del artículo 208 del EOSF.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUARTO. - Que el Pliego de Cargos Personal antes mencionado, fue notificado a MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, RL de Movii, con oficio radicado con el número 2022038813-002-000 del 24 de febrero de 2022, entregado en la misma fecha, según certificado de comunicación electrónica No. E69544810-S, entendiéndose notificado el mismo día, de conformidad con lo señalado en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los literales e) y f), numeral 4° del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

QUINTO. - Que dentro del término legal, mediante comunicación radicada con el No 2022075736-000 del 8 de abril de 2022, MARYOIRY ÁVILA RUBIO, presentó las explicaciones personales respectivas. También solicitó que fueran tenidas en cuenta e incorporadas a la actuación administrativa una serie de pruebas, sobre las cuales la SFC se pronunció sobre su conducencia, pertinencia y eficacia, de acuerdo con lo previsto en el literal i) del numeral 4° del artículo 208 del EOSF.

SEXTO.- Que mediante Auto N°001 radicado con el No.2022038813-006 del 25 de abril de 2022, el Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, decidió sobre la procedencia de unas pruebas dentro de la actuación administrativa, ordenando de unaparte, negar la incorporación de los elementos probatorios documentales presentadas por MARYOIRY ÁVILA RUBIO, descritas en el numeral 4.3.1 del citado auto, y de otra, incorporar las pruebas descritas en el numeral 4.3.2 del mismo acto administrativo, con fundamento en las consideraciones efectuadas en dichos numerales. Contra esta providencia procedía el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación por comunicación, de conformidad con lo señalado en el literal j) del numeral 4° del artículo 208 del EOSF, sin que la RL de Movii, presentara recurso alguno frente al citado acto administrativo.

SÉPTIMO. - Que mediante Auto No. 002 radicado con el No.2022038813-011 del 8 de julio de 2022, se decretó el cierre de la etapa probatoria y se dio traslado a MARYOIRY ÁVILA RUBIO para que presentara sus alegatos de conclusión, el cual fue notificado mediante "Notificación por Comunicación" de manera electrónica a la RL de Movii, mediante oficio radicado con el número 2022038813-013-000 del 11 de julio de 2022, entregado en la misma fecha, (14:51 GMT -05:00) según certificación de entrega de la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. Guía No. E80054799-S.

OCTAVO. - Que la SFC para rendir los alegatos de Conclusión le concedió a MARYOIRY ÁVILA RUBIO, el término legal de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo (11 de julio de 2022), los cuales fueron presentados mediante comunicación radicada con el No. 2022075736-003 del 27 de julio de 2022, documento que se entiende incorporado en su integridad a la presente resolución de carácter sancionatorio y que reitera en su contenido lo expuesto por la misma investigada en el escrito de explicaciones.

NOVENO. - Que de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en concordancia con el numeral 4 del artículo 208 del EOSF, una vez agotada la etapa probatoria y vencido el término de traslado para alegar de conclusión, es procedente adoptar una decisión de fondo dentro del curso de la presente actuación administrativa.

DÉCIMO. - Que reseñados de esta forma los citados antecedentes y con el fin de analizar los argumentos expuestos en su defensa por parte de MARYOIRY ÁVILA RUBIO, la SFC procede a pronunciarse de fondo sobre los descargos y los alegatos de conclusión presentados dentro de la presente actuación administrativa, así:

10.1 CARGOS FORMULADOS A MARYOIRY LILIANA AVILA RUBIO

Se presentan de forma sucinta los cargos formulados por la SFC a MARYOIRY LILIANA AVILA RUBIO a título personal, mediante oficio radicado con el No. 2022038813-000 del 23 de febrero de 2022, tal y como se indica a continuación:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

“(…) 2.1. RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN ADMINISTRATIVA IMPARTIDA POR LA SFC.

Los hechos descritos en el Informe de Inspección de Cumplimiento Personal - RL No.2020104988-049 del 21 de febrero de 2022, que como se indicó es aquí trasladado advierten la ocurrencia de una posible infracción por parte de Maryoiry Liliana Ávila Rubio, en su rol de Gerente– RL de Movii a las normas que más adelante se citan, teniendo como fundamento fáctico un posible retardo en el cumplimiento de la Orden Administrativa radicada con el No. 2020104988-000-000 del 1 de julio de 2020”.

“1.1.5.1 Seguimiento al cumplimiento de la Orden Administrativa emitida por la SFC

Tal y como se desarrolla en los subnumerales 4.1 y 4.1.1 del Informe de Cumplimiento No 2020104988-049 del 21 de febrero de 2022, la RL de Movii posiblemente retardó el cumplimiento de las instrucciones dispuestas en la OA radicada con el No. 2020104988-000-000 del 1 de julio de 2020, por cuanto de las revisiones realizadas a la documentación suministrada por la misma RL, se pudo establecer que no se estaba dando el cumplimiento integral al cronograma de actividades propuesto para el efecto, lo que hizo que se replantearan o diseñaran nuevas actividades en fechas posteriores a las acordadas. Así las cosas, la RL al parecer omitió dar oportunamente la aplicación, alcance o desarrollo a las instrucciones contenidas en la OA con el fin de atender lo ordenado de manera inmediata y efectiva, lo cual afectó directamente la aplicación de los ajustes requeridos en la estructura del SARLAFT de la Entidad Vigilada dentro de plazo establecido, exponiéndola a una potencial materialización del riesgo de LAFT”.

“(…) 2.1.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993)

“Artículo 72. Reglas de conducta y obligaciones legales de las entidades vigiladas, de sus administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y funcionarios: Las entidades vigiladas, sus administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y funcionarios, deben obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio al interés público de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política, para lo cual tienen la obligación legal de abstenerse de realizar las siguientes conductas:

(…) k) Incumplir o retardar el cumplimiento de las instrucciones, requerimientos u órdenes que señale la Superintendencia Bancaria sobre las materias que de acuerdo con la ley son de su competencia...”
(Subrayado fuera de texto)”.

“(…) 2.2. INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA ENTIDAD VIGILADA EN MATERIA DE SARLAFT

“(…)

Frente al cumplimiento de las funciones que en materia de administración de riesgo de LAFT debía adelantar la RL de Movii, la SFC con fundamento en los hallazgos descritos en los numerales 5 y 5.1.1 del Informe de Cumplimiento Personal R.L. No. 2020104988-049 del 21 de febrero de 2022, en concordancia con expuesto en los subnumerales 4.1.2, 4.1.3 y 4.3 del Informe de Cumplimiento Institucional radicado con el No.2021164637-103 del 11 de febrero de 2022, considera que Maryoiry Liliana Ávila Rubio, posiblemente desconoció los presupuestos jurídicos del Capítulo IV, Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica:

“1.1.5.2 Funciones de la RL en materia del SARLAFT

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De acuerdo con los hallazgos descritos en los numerales 4.1.1 y 5.1.1 del Informe de Cumplimiento 2020104988-049 del 21 de febrero de 2022, en concordancia con expuesto en los subnumerales 4.1.2, 4.1.3 y 4.3 del Informe de Cumplimiento radicado con el No.2021164637- 103 del 11 de febrero de 2022, el cual hace parte de la presente actuación administrativa, esta Superintendencia pudo establecer que la RL de Movii, no adelantó una conducta diligente en cuanto al alcance de sus deberes frente a la adecuada gestión del riesgo LAFT en la citada Entidad Vigilada por cuanto, al parecer, omitió: Garantizar que la plataforma tecnológica cumpla con los criterios y requisitos mínimos; proveer el recurso humano necesario para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT; prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento y garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y confidencialidad de la información allí contenida”.

“2.2.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS

“(…) 4.2.4.2. Funciones del representante legal El SARLAFT debe contemplar como mínimo las siguientes funciones a cargo del representante legal o quien haga sus veces:

“(…) 4.2.4.2.4. Garantizar que las bases de datos y la plataforma tecnológica cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el presente Capítulo.

4.2.4.2.5. Proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT.

4.2.4.2.6. Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento.

4.2.4.2.7. Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y confidencialidad de la información allí contenida”.

El numeral 4.2.4.2. transcrito, así como sus subnumerales 4.2.4.2.4 a 4.2.4.2.7, tienen idéntico contenido y numeración, tanto en la Circular Externa 05 de 2016 como en la 027 de 2020, por lo cual, la norma aplica sin variación para los hechos y hallazgos objeto del presente Pliego de Cargos, incluidos aquellos ocurridos con posterioridad al 2 de septiembre de 2021”.

10.2 ARGUMENTOS DE DESCARGOS PRESENTADOS POR MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO

Debemos precisar que las consideraciones de defensa expuestas por la investigada tanto en el escrito de explicaciones como en los alegatos de conclusión son similares en su contenido argumentativo en general y en consecuencia, los mismos serán abordados de forma conjunta para evitar replicar su contenido, así:

10.2.1 SOBRE LA MATERIALIDAD DE LA SITUACIÓN ANALIZADA POR LA SFC

La RL manifiesta en el escrito de descargos que antes de referirse a los cargos consignados en la solicitud de explicaciones, efectuará una breve reflexión sobre la materialidad vinculada a los presuntos incumplimientos presentados por la SFC. Precisa que el artículo 67 de la Ley 1328 de 2009, determina que la actuación administrativa que adelante la SFC deberá ajustarse al principio de materialidad, y que en el caso concreto, si se entendiera o asumiera en gracia de discusión que dichas fallas se cometieron, las mismas en su entender no conllevaron la concreción de ningún riesgo, por lo que su efecto sería relativo e inmaterial, y en consecuencia, el interés jurídico tutelado por dicho ente de control no se habría visto vulnerado. Agregó que su intención siempre ha sido cumplir con la normativa aplicable en materia de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y en esa medida, ha administrado de forma adecuada el referido riesgo, por lo que en ningún momento el mismo se ha materializado (de ninguna forma) bajo su administración.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho procede a pronunciarse sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO de la siguiente manera:

En efecto el artículo 67 de la Ley 1328 de 2009, consagra lo siguiente:“(…) En adición a los principios que orientan la actuación administrativa, la Superintendencia Financiera de Colombia se sujetará en el ejercicio de sus facultades y funciones de inspección y vigilancia, y control a los siguientes principios: 1. Principio de materialidad: La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá sus funciones y facultades de inspección y vigilancia, así como de control, dando especial relevancia y atención a aquellos hechos que por su naturaleza, cuantía o circunstancias coyunturales, afecten de manera grave la confianza pública en el sistema financiero, asegurador y en el mercado de valores, pongan en peligro la continuidad del servicio, o comporten un riesgo sistémico” (El subrayado es nuestro).

Ahora bien, contrario a lo manifestado por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO en sus descargos, para la SFC la conducta omisiva en que incurrió frente a dar oportuno seguimiento al cumplimiento de la Orden Administrativa emitida por la SFC en adelante (OA), resulta material como quiera que los artículos 102 y siguientes del EOSF, establecen la obligación de adoptar mecanismos y reglas de conducta que deben observar las Entidades Vigiladas, los administradores y demás funcionarios, y en especial los responsables de la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), con el propósito de evitar que se vean expuestas a la materialización del mismo, en el curso y desarrollo del objeto social para el cual fueron creadas.

Es así como, atendiendo lo anterior, el numeral 3° del artículo 102 del EOSF dispone: “(…) Para efectos de implantar los mecanismos de control a que se refiere el numeral anterior, las entidades vigiladas deberán diseñar y poner en práctica procedimientos específicos, y designar funcionarios responsables de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos (...)”.

Ese es el caso de la investigada, en calidad de RL de la sociedad Movii durante la ocurrencia de los hechos descritos en los Informes de Cumplimiento No. 2021164637-103 del 11 de febrero de 2022 y No. 2020104988-049 del 21 de febrero de 2022, expresados en forma sucinta, en los numerales 1.1.4 y 1.1.5 del acto de Formulación de Cargos, en los que aparece plenamente demostrado que MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO en su condición de RL de Movii no adelantó una conducta diligente en su condición de miembro de la estructura organizacional del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) de la SEPDE, pues omitió implementar oportunamente las instrucciones solicitadas por la SFC en la OA, lo cual implicó un retraso en la manera de atender dichas instrucciones de forma inmediata y efectiva en los plazos acordados, exponiendo a la Entidad Vigilada a una potencial materialización del riesgo de LAFT.

Contrario a las afirmaciones de la RL de Movii, dicha situación sí pudo conllevar la concreción de riesgos en materia de LAFT para dicha entidad, por lo que su efecto no es relativo e inmaterial, y en consecuencia, el interés jurídico tutelado por dicho ente de control sí se vio afectado y vulnerado, para ello basta con remitirse a lo evidenciado por los supervisores de la SFC en los numerales 4.1.1.1 al 4.1.1.8 del Informe de Cumplimiento trasladado, No 2020104988- 049 del 21 de febrero del 2022, en donde se expone una cronología de envío de información que da cuenta de dichos retardos e incumplimientos, los cuales resultan materiales pues ponen a la Entidad Vigilada en evidente peligro de que se materialicen los riesgos que se busca precaver.

Ahora bien, el literal k) del artículo 72 del EOSF, establece unas exigencias de conducta, así como deberes y obligaciones legales propios de los administradores, directores, representantes legales, de nuestras Entidades Vigiladas, determinando que “(…) deben obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio al interés público de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política”, para lo cual tienen la obligación legal de abstenerse de “(…) k)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Incumplir o retardar el cumplimiento de las instrucciones, requerimientos u órdenes que señale la Superintendencia Bancaria sobre las materias que de acuerdo con la ley son de su competencia”.

Al respecto, debemos indicar que la actividad financiera, aseguradora y bursátil no es igual a las demás actividades que realizan los particulares en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución Política, que las califica como de “interés público”, motivo por el cual, se orienta a la búsqueda del bienestar general. Así mismo, la citada disposición constitucional restringe el acceso a la prestación de los servicios financieros, en la medida en que exige la autorización previa del Estado para su ejercicio y el cabal cumplimiento de las instrucciones para el ejercicio y desarrollo de objeto social en condiciones de transparencia y seguridad en la gestión de los riesgos frente al mercado y al público en general. Esta limitación tiene como fundamento el alto riesgo social que implica esta actividad y la consecuente necesidad de asegurar la confianza pública en el servicio.

Adicionalmente, la noción de orden público permite, por una parte, imponer la realización de los principios superiores de un Estado Social, destinados a velar por la conservación y vigencia no sólo de las libertades individuales de los ciudadanos, sino también de los derechos sociales o prestacionales de todas las personas y, por otra parte, conlleva al reconocimiento de un Estado interventor, quien fundado en principios de equidad, regula imperativamente las relaciones entre los particulares en protección del interés público, con el propósito de alcanzar un pleno desarrollo económico ligado al logro efectivo de una justicia social, como ocurre con las normas de prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Ahora bien, no puede desconocerse que el ingreso de dineros ilícitos, así como la salida de recursos para financiar actividades terroristas en una Entidad Vigilada afecta notoriamente el sistema financiero y a sus agentes, no sólo por los sentimientos de desconfianza e inseguridad que generan en los clientes y usuarios del mismo sistema, o el desprestigio reputacional que puede sufrir la entidad y adicionalmente a sus representantes quienes se hacen acreedores a las sanciones correspondientes, sino por la enorme puerta que se abre a los criminales, para que operen libremente en los circuitos financieros del mundo.

Omitir aplicar y dar plena observancia a las normas mínimas en materia de administración del riesgo de LAFT, en la práctica se traduce concretamente en no prevenir la ocurrencia y potencial materialización de actos que signifiquen inminente un peligro de movimiento de recursos relacionados con actividades ilícitas al sector financiero, en este caso, lo cual afecta directamente la protección del interés colectivo, la convivencia social, la seguridad ciudadana y, a través de estos valores, de bienes personales como la protección del ahorro privado y del patrimonio económico de todos los ciudadanos. Por lo tanto, retardar el cumplimiento de las órdenes emitidas por la SFC pone en peligro el interés público tutelado en cuanto a la seguridad y estabilidad del mercado financiero en general.

Y es por ello que, el incumplimiento o la inobservancia de las obligaciones legales y de las instrucciones impartidas por el Organismo de Supervisión en torno a tal aspecto, como todas y cada una de las conductas censuradas en la presente actuación administrativa, revisten gravedad y materialidad. En tal sentido, la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) las actividades bancaria, bursátil, aseguradora o cualquier otra vinculada con la captación de recursos de los inversionistas o ahorradores se encuentran sometidas a un régimen estricto de intervención del Estado, en el sentido de requerir autorizaciones previas para su funcionamiento, e igualmente, son constantemente vigiladas y controladas por organismos gubernamentales de carácter técnico, llamados a ejercer funciones de policía administrativa, como lo es la Superintendencia Financiera de Colombia, con el propósito de asegurar la confianza en el sistema financiero, así como garantizar la transparencia de las actividades realizadas por las entidades vigiladas, evitar la comisión de delitos, en especial, relacionados con el lavado de activos, y proteger los intereses de terceros de buena fe que pueden resultar lesionados por operaciones de mercado irregulares, inseguras o inadecuadas” (El Subrayado es nuestro).

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para profundizar en la relevancia y trascendencia que conllevan las normas sobre prevención y control de actividades delictivas y particularmente del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en cualquier escenario económico, retomamos lo señalado en la exposición de motivos de la Ley 526 de 1999:

“Lamentablemente en nuestro medio, las diferentes modalidades de lavado de dinero han permeado en forma creciente nuestra sociedad en los últimos tiempos.

“El efecto neto del flujo de capitales relacionado con actividades ilícitas, afecta negativamente las actividades de la economía formal a través del contrabando, la evasión de impuestos, la subfacturación de importaciones, la sobrefacturación de exportaciones, las exportaciones ficticias y la venta directa de divisas en el mercado libre.

“(…) Así, las actividades ilícitas han generado efectos perversos en la capacidad de los sectores formales de la economía colombiana para crear riqueza afectando negativamente la estabilidad institucional del país y el ordenado funcionamiento de la democracia.

“El lavado de activos en el sistema económico colombiano ha implicado la acelerada sustitución de los agentes formales por agentes informales, lo que ha conllevado al deterioro del orden social. Los costos directos e indirectos que la corrupción le ha generado a la sociedad y al Estado colombiano, el creciente índice de impunidad en la denuncia y juzgamiento de los delitos, y el impacto financiero que en materia de protección del orden público generan el narcotráfico y la guerrilla, son inconmensurables.

“Si bien los efectos nocivos del lavado de activos sobre la economía del país son considerables, no hay que perder de vista las catastróficas consecuencias que trae para una sociedad en el campo moral y de la convivencia entre sus individuos, una economía permeada no solo por el dinero ilícito, sino por los principios que detenta. En ese sentido, la lucha contra el lavado, más que una medida de racionalidad económica es un imperativo ético con el que Colombia no debe dudar en comprometerse” (El subrayado es nuestro).

Es en virtud de lo expuesto, que se establece que la violación a normas relativas a la prevención y control del lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo por parte de los representantes legales y administradores de las Entidades Vigiladas por la SFC es de la mayor gravedad, razón por la cual, los incumplimientos en los que incurrió la investigada y que nos ocupan, merecen reproche y por ende la adopción de una medida administrativa sancionatoria.

Por lo tanto, dentro de la presente actuación administrativa no se desconoció bajo ningún supuesto la aplicación del principio de materialidad, puesto que dada la relevancia de los hechos descritos en la Formulación de Cargos, nos encontramos en presencia de una potencial afectación de la confianza del sistema, la continuidad de los servicios financieros, así como la eventual materialización en riesgos sistémicos en los mismos mercados; es decir, se encuentra perfectamente asociado el comportamiento negligente de la RL de Movii, con los efectos que producen sus actuaciones u omisiones en el público usuario del sistema financiero y no simplemente hechos ajenos a tales circunstancias.

Además, respecto de la adecuada administración del riesgo de LAFT el análisis de materialidad resulta irrelevante, en la medida en que basta con la presencia de un único evento de ingreso o salida de recursos de origen ilícito en una Entidad Vigilada, para que se materialice un riesgo asociado de tipo legal, reputacional, operativo o de contagio, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera, al ser utilizada para tales actividades. Ahora bien, en el caso de Movii las instrucciones impartidas en la OA no fueron atendidas en debida forma por la RL, es decir, bajo los términos y tiempos exigidos por la SFC, exponiendo con ello a Movii en el desarrollo de su objeto social a la potencial ocurrencia y materialización del riesgo objeto de nuestra supervisión.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Así las cosas, no puede predicarse válidamente que la SFC haya efectuado adecuaciones típicas de manera caprichosa, sino que por el contrario, al elaborar el correspondiente acto de Formulación de Cargos realizó una valoración de los hechos, las pruebas y las normas, a fin de determinar si existía el mérito suficiente para formular cargos en contra de la investigada, situación que fue plenamente establecida, razón por la cual se señalaron como infringidos diversos tipos normativos que corresponden a obligaciones y prohibiciones señaladas en nuestro ordenamiento legal para las Entidades Vigiladas y sus administradores.

Finalmente, no sobra señalar en todo caso que la RL de Movii en sus descargos, se limita a plantear unas supuestas deficiencias en la aplicación del principio de materialidad de las conductas glosadas, sin entrar a determinar los casos concretos y específicos ni las razones puntuales de su reparo, siendo valoradas como simples afirmaciones subjetivas respecto de las cuales este Despacho omite efectuar comentarios particulares, dada la indeterminación del citado argumento y la falta de concreción de la defensa.

10.2.2 SOBRE EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN ADMINISTRATIVA IMPARTIDA POR LA SFC

10.2.2.1 Sobre los deberes de los administradores: MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, en su condición de Representante Legal de Movii para la época de los hechos, en relación con el cumplimiento de la OA radicada con el No.2020104988-000 del 1 de julio de 2020, manifiesta que durante los años 2020, 2021 y 2022, cumplió a cabalidad sus obligaciones legales. Afirma que si bien se ha reconocido que existían oportunidades de mejora en lo relativo al fortalecimiento de los estándares de prevención de riesgo de la Entidad Vigilada, los mismos no evidenciaban incumplimientos normativos que pudiesen endilgársele a MOVII o a ella como su representante legal.

En efecto, inicialmente se refirió a los deberes esperados de un administrador de una sociedad, entre los que se encuentra el actuar con buena fe, lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios; indica que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil consagra tres especies de culpa o descuido, grave, leve, y levísimo y que su conducta no se enmarcó en dichos presupuestos. Continúa por afirmar que en el cargo objeto de estudio, la SFC la acusa de haber actuado de forma negligente, al retardar el cumplimiento de sus instrucciones. No obstante, expresa que la SFC no consideró dentro de su análisis que en atención a las instrucciones impartidas en la OA, desde su recepción Movii emprendió acciones tendientes a su observancia presentando argumentaciones particulares sobre los hechos que soportan las imputaciones efectuadas por la SFC.

CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho procede a pronunciarse sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO de la siguiente manera:

Frente a los argumentos expuestos por la RL es preciso reiterar inicialmente que se encuentra plenamente probado dentro de la presente actuación administrativa que mediante oficio radicado con el No. 2018009398-000 del 25 de enero de 2018, la Secretaría del Comité de Posesiones de la SFC, le manifestó a la investigada que "(...) en sesión celebrada el día 18 de enero de 2018, autorizó la representación legal como Gerente General de Movii S.A Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos. De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Decreto 2150 de 1995, con la presente autorización se entiende surtida la diligencia de posesión y prestado el juramento respectivo a partir del 18 de enero de 2018". (El subrayado es nuestro).

Por lo tanto, a partir de la fecha antes citada MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO adquiere la condición de RL de Movii comprometiéndose para todos los efectos a dar estricto y efectivo cumplimiento a los deberes y obligaciones propias de su condición frente a la gestión del riesgo de LAFT.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Así mismo, dentro del curso de la presente actuación administrativa se pudo establecer que MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, en su condición de Gerente General de Movii, suministró la información requerida por los supervisores de la SFC, tal como consta en los Informes de Cumplimiento números 2021164637-103 del 11 de febrero de 2022 y 2020104988-049 del 21 de febrero de 2022, donde se puede evidenciar las diferentes respuestas emitidas en curso de los procesos de inspección y que comprometen su responsabilidad dentro de los hechos que sirvieron de soporte al acto de Formulación de Cargos.

Lo anterior, por cuanto se debe reiterar que la RL omitió atender los requerimientos de ajuste a la gestión de riesgos de LAFT de la Entidad Vigilada dentro de los términos requeridos y con imprecisiones sobre las condiciones en las cuales Movii venía dando cumplimiento al cronograma propuesto en la OA. La información dada a la SFC no resultó fiel a la realidad que presentaba Movii, afectando la eficacia y efectividad de la aplicación de correctivos en la estructura de su SARLAFT .

Así, los argumentos expuestos por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO no logran desvirtuar las imputaciones efectuadas por la SFC en relación con el cumplimiento de la OA radicada con el No.2020104988-000 del 1 de julio de 2020, durante los años 2020, 2021 y 2022, pues es claro que las órdenes impartidas a las Entidades Vigiladas deben ser cumplidas con una particular prudencia y diligencia que implica una forma de actuar propia de personas conocedoras de técnicas de administración. Se trata, pues, de un patrón de conducta más estricto, que implica una evaluación seria e informada de las principales opciones de que dispone el administrador en el momento de tomar determinaciones, retrasos que efectivamente evidencian un verdadero incumplimiento normativo que indica un desconocimiento de un deber propio de su condición de representante legal.

En efecto, tal y como lo anota la misma investigada se refiere a los deberes propios esperados de un administrador de una Entidad Vigilada por la SFC, entre los que se encuentra el actuar con buena fe, lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios; este actuar omisivo configura una conducta negligente, entendida como la ausencia de un comportamiento adecuado en una situación concreta, plenamente exigible, como ocurrió en el caso bajo estudio, en razón de los retrasos en el cumplimiento de las actividades previstas en los plazos acordados en el cronograma de trabajo diseñado para atender las instrucciones que hacían parte de la OA a la que se aquí se ha hecho referencia en varias oportunidades.

Finalmente, se debe poner de presente que los representantes legales de las Entidades Vigiladas tienen deberes de actuación y responsabilidades específicas frente a la SFC, así como frente a la sociedad, los asociados y terceros. Estos últimos se constituyen también en sujetos de especialísima protección, en cuanto pueden verse perjudicados por una administración desatenta o negligente, más aún en aquellas actividades catalogadas como de interés público en los términos del artículo 335 de la Constitución Política como ocurre en el sector financiero, bursátil y asegurador.

Uno de los rasgos característicos más resaltables que se han producido en la evolución de las entidades financieras se circunscribe a la mayor exigencia de responsabilidad a que se encuentran sometidos los administradores y directivos de esas entidades, en la medida en que se trata de un sector que ocupa una posición central en nuestra economía y que, además, capta recursos, razón por la cual, la exigencia de responsabilidad hacia los administradores y directivos que integran este sector es aún mayor.

Por lo tanto, retomando lo indicado en el concepto de violación del acto de Formulación de Cargos, los Representantes Legales de las Entidades Vigiladas no sólo son administradores de las mismas sino también auténticos gestores del cumplimiento de los deberes exigibles frente a los requerimientos y órdenes impartidas por la SFC, dentro de las facultades de corrección de las que se encuentra investida, más aún en los referentes a la correcta administración del riesgo de LAFT. Así, el administrador tiene también un deber positivo de conducta que se manifiesta en su obligación de poner todo su empeño en que se dé cumplimiento a las normas legales y los requerimientos e instrucciones impartidas por los organismos de inspección, control y vigilancia estatal.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Finalmente, sobre lo dispuesto por el artículo 63 del Código Civil el cual consagra tres especies de culpa o descuido, grave, leve, y levísimo, conviene precisar que dicho criterios y concepto aplica para la determinación de la responsabilidad civil de los administradores y no respecto de los deberes propios de su condición en materia de administración del riesgo de LAFT bajo las normas y principios del derecho administrativo sancionatorio que aplica la SFC.

10.2.2.2 El cronograma: Al respecto considera MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO relevante señalar que el cronograma presentado a la SFC con ocasión de la implementación de las instrucciones impartidas a través de la OA, en su momento presentó un avance del 83%. Y que en su sentir dicha información puede ser evidenciada en la entrega efectuada a la SFC bajo el radicado No. 2020104988-031-000 del 3 de septiembre de 2021 (Anexo 1 cronograma) (Anexo 2 y Anexo 2.1 y 2.2 certificación de revisor fiscal sobre su cumplimiento).

CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho procede a pronunciarse sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO de la siguiente manera:

Para refutar los argumentos planteados por la investigada, debemos retomar los antecedentes que sirvieron de fundamento a la expedición de la OA, en efecto la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizó un proceso de supervisión “Extra Situ” con el fin de identificar los resultados de la evaluación anual realizada por la Auditoría Interna, a la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas y los elementos del SARLAFT en Movii, detectando deficiencias en su sistema de administración de riesgo y sus posibles soluciones.

Es así como, en desarrollo de los resultados obtenidos, y teniendo de presente la información antes citada, la Auditoría Interna estableció falencias en las etapas de identificación, medición, control y monitoreo; en el conocimiento del cliente; en la documentación del SARLAFT; en la revisión periódica del sistema y en los reportes que la Entidad Vigilada debe efectuar a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF.

Por lo expuesto, la SFC mediante oficio radicado con el No. 2020104988-009-000 del 1 de julio de 2020, emitió una OA a Movii, sobre las falencias detectadas en su sistema de administración de riesgo, calificando la conducta de dicha entidad como negligente y omisiva, constitutiva, además, de una práctica insegura y no autorizada para el ejercicio de la actividad financiera, pues exponía innecesariamente a la misma a una potencial materialización del riesgo de LAFT, elementos que sirvieron de sustento fáctico y jurídico para dicho acto administrativo, con instrucciones precisas para efectuar ajustes al sistema antes mencionado.

De conformidad con la OA dirigida a la Entidad Vigilada, se le solicitó remitir un cronograma diseñado para llevar a cabo las medidas anotadas con fecha límite de cumplimiento integral el 9 de noviembre de 2020. Este cronograma debía señalar como mínimo, lo siguiente: i) los responsables del cumplimiento de cada actividad contenida en la OA, ii) fechas de inicio y finalización de cada actividad, dentro del plazo límite otorgado, iii) informes de avances y entregables.

Adicionalmente debía remitirse mensualmente, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al del periodo objeto del informe y hasta su culminación, un reporte de los avances de las actividades establecidas en el cronograma, suscrito por el Representante Legal y el Oficial de Cumplimiento. Así mismo, la Junta Directiva debía pronunciarse sobre cada una de las instrucciones impartidas en la actuación administrativa mencionada, en las próximas reuniones que celebrara la Entidad Vigilada, para lo cual debería remitir copia del extracto del acta correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a la realización de la misma.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De igual forma, debía informar a la Auditoría Interna y a la Revisoría Fiscal de la expedición de la citada OA, para que estos órganos de control realizaran el seguimiento al cumplimiento de las instrucciones impartidas y del cronograma propuesto para subsanar las debilidades evidenciadas, y remitir a la SFC, un informe bimestral, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al del periodo del informe y hasta su culminación, en los que constaran los avances y resultados obtenidos.

Sin embargo, en virtud de las revisiones realizadas a la información suministrada por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO en su condición de RL a la SFC, su responsabilidad se encontró comprometida toda vez que se pudieron establecer imprecisiones respecto del cumplimiento de la OA, al reportar como culminado en su totalidad el cronograma que había sido “diseñado para llevar a cabo las medidas y planes de acción a ejecutar con el objetivo de dar cumplimiento a las exigencias del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT”, siendo que las mismas no se encontraban debidamente implementadas dentro del esquema del SARLAFT de la Entidad Vigilada. Así mismo, se evidenciaron incumplimientos reiterativos a los tiempos establecidos por la SFC y por la RL de Movii para ejecutar las actividades planteadas y así atender dicha OA.

En efecto, luego de verificada la documentación suministrada por la RL, esta Superintendencia pudo establecer que la Entidad Vigilada no daba cumplimiento a seis (6) instrucciones impartidas en la OA, a saber: 3.1.1 Etapa de identificación, 3.1.2. Etapa de medición, 3.1.3. Etapa de control, 3.1.4. Etapa de monitoreo, 3.3.1. Documentación y 3.4.1. Revisión periódica del Sistema de LAFT; estos hallazgos se contradecían con lo afirmado en su comunicación sobre “Dando cumplimiento a la orden administrativa con número de radicado en mención, nos permitimos adjuntar el cronograma de actividades culminado en su totalidad, con el detalle de las mismas y su respectiva evidencia” (El subrayado es nuestro).

Ahora bien, se resalta que la información y documentación que se allegó a la Comisión de Visita en virtud de los requerimientos formulados, compromete institucionalmente a la entidad que la suministra, y personalmente a su Representante Legal cuando sea quien la aporte, entendiéndose como auténticas, y para los efectos legales del caso tendrán el carácter probatorio suficiente para la adopción de las decisiones administrativas pertinentes.

Ahora bien, luego de efectuar un análisis particular a las pruebas que hacen parte de la presente actuación administrativa sobre este acápite, y si bien el cronograma indica un supuesto avance del 83% en el cumplimiento de las órdenes emitidas, en virtud de las revisiones realizadas a la información suministrada por su RL se observó la presencia de imprecisiones respecto del cumplimiento de la OA, debido a que las instrucciones allí solicitadas no se encontraban debidamente implementadas dentro del esquema del SARLAFT de la Entidad Vigilada. Así mismo, se evidenciaron incumplimientos reiterativos a los tiempos establecidos por la SFC y por la misma Entidad Vigilada para ejecutar las actividades planteadas y así atender dicha OA.

Adicionalmente, cobra relevancia mencionar que de los hechos y pruebas que obran dentro de la presente actuación administrativa, la SFC pudo establecer tal y como se menciona en el numeral 4.1.1.1. del informe de cumplimiento personal, radicado con el No.2020104988-049 del 21 de febrero de 2022, lo siguiente:

Tanto el Informe de Auditoría Interna como el de Revisoría Fiscal remitidos a la SFC el 6 de octubre de 2020, hacen alusión a cuatro (4) instrucciones (con numerales 3.1.4, 3.3.1, 3.4.1 y 3.5.1 de la OA), las cuales ya deberían haber sido implementadas por la administración o se encontraban con estado finalizado, sin embargo, señalaban que aún se encontraban en proceso de aprobación de la Junta Directiva.

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2020, la RL informa que:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

“Dando cumplimiento a la orden administrativa con número de radicado en mención, nos permitimos adjuntar el cronograma de actividades culminado en su totalidad, con el detalle de las mismas y su respectiva evidencia.

De igual manera, seguiremos en mejora continua, adaptando el proceso a las necesidades de la compañía, acogiendo los mejores estándares que nos ayuden a fortalecer el sistema. De antemano agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.” Subrayado fuera de texto.

Y luego, el 7 de diciembre de 2020, en comunicación suscrita por la RL remitió los informes de Auditoría Interna¹⁷ y el de la Revisoría Fiscal y en ellos se presenta lo siguiente:

Respuesta de Auditoría Interna:

“En relación con el aspecto mencionado, se observó la versión actualizada del Manual SARLAFT, con los ajustes a la identificación de riesgos, especificando la metodología para la identificación de los mismos. De igual forma, tuvimos evidencia del modelo de cálculo estadístico de la segmentación implementada por la organización. Tal como lo indica la Compañía, continúan en el proceso de segmentación.

Respuesta Revisoría Fiscal:

Por su parte, Ernst and Young Audit SAS señala en su informe del 4 de diciembre de 2020, que los ítems de la Orden Administrativa que hasta ese momento seguían pendientes, se encontraban en el estado de “Finalizado”.

De acuerdo con lo anterior, se pudo establecer, que contrario a los hechos evidenciados dentro de la presente actuación administrativa, el informe de la Revisoría Fiscal, dictaminó que las instrucciones de la OA se habían cumplido y habían finalizado, no obstante, lo anterior contradice lo señalado por la misma RL quien ya había manifestado que se encontraban pendientes por desarrollar entre otras, algunas actividades relacionadas con la implementación de la automatización sobre los monitoreos a través de las herramientas CERO modulo AML Suite y la aprobación por parte de la Junta Directiva.

Lo cual permite concluir que precisamente existía una contradicción evidente entre la información remitida por la RL y los órganos de control respecto al cumplimiento de las instrucciones emitidas por la SFC mediante OA, aspecto que permite determinar el grado de negligencia bajo el cual actuó la citada representante, teniendo el deber de acatar en debida forma las directrices emitidas por este ente de supervisión e implementar los ajustes a su esquema de administración de riesgo de LAFT y de reportar su verdadero grado de avance en Movii.

10.2.2.3 Ajustes a las fechas de cumplimiento informadas: MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO manifiesta en su defensa que el plan de trabajo presentado a la SFC para atender la OA estaba siendo ejecutado en 2020 y 2021, toda vez que se contrató con el proveedor Pirani para la implementación de la segmentación SARLAFT y el perfil de riesgo de vinculación. Agrega que durante el proyecto se presentaron múltiples complicaciones con el mencionado proveedor, lo que llevó a que el Oficial de Cumplimiento en su momento, escalara al Comité de Riesgos la decisión de realizar la segmentación SARLAFT a través de “Rstudio” como plan b.

Por tanto, si bien la modelación de la segmentación se estaba ejecutando, durante la visita efectuada por la SFC, se evidenciaron algunas falencias en el modelo, lo que requirió que el nuevo Director SARLAFT, solicitara ajustes y aprobación de la Junta Directiva, de un nuevo cronograma de entrega para diciembre de 2021.

No obstante lo anterior, considera que debe tenerse en cuenta que para los demás puntos de mejora identificados por la SFC ya se habían enviado evidencias sobre el cierre de los mismos, de tal forma

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

que las únicas materias que tomaron más tiempo del inicialmente presupuestado, por razones no imputables a la compañía o su conducta, fueron la segmentación y la identificación del perfil de riesgo de los clientes.

Con base en lo anterior, MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO continúa argumentando que si se observan las actuaciones adelantadas podrá comprobarse que se agotaron todos los esfuerzos y se realizaron todas las actuaciones que se encontraban en su capacidad para dar respuesta a las solicitudes de la SFC, luego de haberse presentado un hecho ajeno a su voluntad y que tuvo un efecto directo en los tiempos que inicialmente se habían previsto para el desarrollo de algunas de las actividades.

CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho procede a pronunciarse sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO de la siguiente manera:

La Delegatura de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en adelante (DRLAFT) atendiendo el plan de supervisión para la vigencia del 2021, realizó un proceso de supervisión "In Situ" a Movii S.A. entre el 20 de septiembre y 15 de octubre de 2021, informado mediante oficio radicado con el número 2021164637-001-000 del 21 de agosto de 2021. En desarrollo del proceso de supervisión, se realizó el análisis de la documentación aportada por la Entidad Vigilada, especialmente aquella en la que se describe la metodología de segmentación, que se encontraba en el Manual SARLAFT de la SEDPE.

Se verificó el Anexo 8a denominado "Metodología de Segmentación Factores de Riesgo MOVII S.A Versión 01" en el cual se describen algunos aspectos generales relacionados con las etapas del SARLAFT, no obstante, es de aclarar que este documento no daba cuenta de la metodología de segmentación que estaba empleando la Entidad Vigilada.

Cabe mencionar que al momento de la visita, la RL había informado en su comunicación del 14 de mayo del 2021, que se encontraban en fase de implementación de la segmentación por factores de riesgo con la aplicación PIRANI AML SUITE y que se documentaría en el tercer trimestre de 2021. No obstante lo anterior, se pudo establecer que la situación real de la Entidad Vigilada difería de lo reportado posteriormente en su comunicación del 3 de septiembre de 2021, donde indicaba que se encontraba pendiente por finalizar la actividad relacionada con la segmentación (de la etapa de identificación) y que finalizaría el 31 de octubre de 2021, lo cual tampoco coincide con lo presentado en el cronograma, el cual se adjuntó por parte de la RL a dicha comunicación.

La SFC, pudo determinar que la RL informó dos actividades relacionadas con la segmentación: la primera correspondía a diseñar y definir el modelo, que habría iniciado la primera semana de marzo y supuestamente finalizaría la cuarta semana de mayo del 2021 y la segunda actividad relativa a la implementación del modelo, que iniciaría en la primera semana de junio y finalizaría la cuarta semana de septiembre de 2021.

Aunado a lo anterior, se evidenció en el ActaNo 12 del 21 de abril del 2021, que fue el Comité de Riesgos, sin ser la instancia legalmente autorizada ni competente para el efecto, quien aprobó la aplicación de la metodología de segmentación con fecha prevista de culminación en julio de 2021, metodología que se considera inexistente dentro de la estructura de la administración SARLAFT en los temas inherentes a la documentación, por cuanto carece de la aprobación por parte de la Junta Directiva, que es el órgano societario establecido para tales efectos. La anterior situación no fue advertida por la RL lo que evidencia una vez más que permitió la entrega a la SFC de documentación sin el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No obstante lo anterior, con el propósito de verificar el avance en la aplicación de la metodología y el desarrollo del proceso, se programó con la Entidad Vigilada una prueba de recorrido, realizada el día 23 de septiembre de 2021 sobre “Segmentación de factores de riesgo LAFT”. En desarrollo de ella, la Comisión de Visita encontró que la metodología presentada por la Dirección de Riesgos y AML era diferente a la que se había referido en la comunicación del 14 de mayo (Pirani). Ésta nueva metodología consistía en la construcción de modelos clustering por medio del software libre Studio R. Adicionalmente, la Dirección de Riesgos y AML informó en la prueba de recorrido que éstos se encontraban en etapa de modelado con fecha de culminación el 30 de septiembre de 2021.

La nueva metodología denominada “Plan B”, fue aprobada por el Comité de Riesgos tal y como consta en el Acta No 13 del 15 de junio de 2021 en donde se indica lo siguiente: “El Director de Riesgos también alude que el retraso se debe a las actividades de segmentación, debido a que el proveedor se ha tardado más de lo esperado, y que por ello, el Plan B, se encuentra en realizar un proceso paralelo ejecutando en Código R, para cumplir con la actividad que se tiene que presentar cerrada en el mes de Junio a la Superfinanciera”.

Se reitera que la metodología denominada Plan B no contaba con la debida autorización para su implementación por parte de la Junta Directiva y fue avalada y remitida a la SFC por la RL informando además que sería finalmente la que implementaría, debido a los inconvenientes que se presentaron con el proyecto original del proveedor PIRANI.

Para efectos de lo indicado en el párrafo precedente se agendó una segunda reunión el 6 de octubre de 2021, y de la presentación realizada durante esa sesión, respecto a la metodología denominada “Plan B”, se observó que la Entidad Vigilada sí pretendía implementar esta metodología, en la que se evidenció eliminación de variables, derivada de la baja calidad y deficiente poblamiento de la base de datos, así como no realizar las parametrizaciones para todos sus productos, incluyendo especialmente, el depósito simple que es el más representativo para el desarrollo de su objeto social.

Además, y teniendo en cuenta que la RL había informado a la SFC que esperaba la culminación de dicha metodología para el 31 de octubre de 2021, se advirtió que el estado de avance de la misma no era el que presentó ni se ajustaba al cronograma que remitió, en donde solamente quedaría pendiente por ejecutar la implementación en el aplicativo en R (que finalizaría el 30 de septiembre), y que la actividad previa a ésta ya estaba finalizada (“Se presenta al Comité de Riesgos la metodología de segmentación SARLAFT por factores de riesgos (Crisp-DM y con el algoritmo de segmentación kprotos”).

De otra parte y a raíz de los inconvenientes presentados con el Proveedor Pirani, la Comisión de Visita le requirió información a la RL sobre el seguimiento realizado a dicho proveedor y en respuesta a lo anterior, remitió varios correos electrónicos en los cuales se evidenció que el Oficial de Cumplimiento en repetidas ocasiones (28 y 31 de mayo de 2021 y 1 de junio de 2021), le transmitió su preocupación solicitando su colaboración, por la falta de calidad, completitud en la información, errores y datos incompletos en la base de datos, influyendo en el avance de la implementación de una adecuada segmentación. Estos correos son prueba de la falta de prioridad que la RL, como responsable del seguimiento al cumplimiento de la OA, le dio al asunto pues omitió atenderlos con el propósito de dar solución a este inconveniente, lo cual generó retrasos en la oportunidad de su implementación.

Así mismo, la RL informó en su comunicación que: “(...) el motivo por el cual no se ha logrado cerrar al 100% los planes de acción para monitoreo, segmentación de los factores de riesgo y señales de alerta, responde a la decisión del oficial de cumplimiento que se encontraba en su momento desempeñando dicha función, la cual hace referencia a la implementación de estos tres procesos mediante la herramienta de Pirani AML Suite, y que para tal fin cerró la negociación con el proveedor Pirani SAS, dejando definido un cronograma de trabajo el cual se ha visto afectado en primera instancia, por el retiro repentino del oficial de cumplimiento y en segundo lugar debido a aspectos relacionados con las metodologías utilizadas por el proveedor para la segmentación, afectando el

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

desarrollo de las segunda y tercera fase del proyecto, perfil de clientes y señales de alerta respectivamente.(...)”.

Además, es la misma MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, quien en sus descargos menciona que si bien la modelación de la segmentación se estaba ejecutando, durante la visita efectuada por la SFC, el nuevo Director SARLAFT, solicitó ajustes y aprobación de la Junta Directiva de dicha metodología, se tradujo en un retraso en su implementación y que por tal razón se debía generar un nuevo cronograma de entrega, para diciembre de 2021.

De los hechos antes mencionados se pudo establecer que la RL no adelantó una conducta diligente teniendo en cuenta el prologando retraso en el cumplimiento de la OA respecto del desarrollo y aplicación de una adecuada metodología de segmentación, así como su correcta puesta en marcha, aunado al hecho de que fue el Oficial de Cumplimiento quien le reportó los inconvenientes registrados con el proveedor, y que no fueron atendidos con suficiencia, acorde con el deber de diligencia exigible a su condición de RL hecho que contradice lo expuesto en los correos relacionados previamente y que fueron suministrados por la misma RL, situación que afectó la implementación de las etapas de identificación y monitoreo de la Entidad Vigilada, aspectos que resultaban prioritarios para una debida gestión de riesgos LAFT.

10.2.2.4 Remisión de información y extensiones de tiempo: Sobre este aspecto, MARYOIRY ÁVILA RUBIO afirma que en ningún momento las respuestas enviadas fueron objeto de imprecisiones como lo afirma la SFC y que debe tenerse en cuenta que para la época de los hechos Movii, adelantaba las tareas solicitadas, como es la identificación, medición y control de riesgos, así como los monitoreos del SARLAFT. Considera que si bien en su momento las mencionadas actividades se ejecutaban de manera manual o a través de una macro, las mismas eran realizadas dentro de los criterios exigidos por la normativa vigente, por lo que en su sentir, a diferencia de lo que sostiene la SFC, no se presentó ninguna información que no fuese acorde a la realidad de Movii.

Afirma que el acatamiento de las actividades fue certificado por el Oficial de Cumplimiento de la Entidad Vigilada quien como es de conocimiento de la SFC, tiene a su cargo la responsabilidad de la administración y autogestión del riesgo, allega como elementos de prueba la matriz de riesgos de Movii y el Manual SARLAFT de 2021

Así mismo argumenta que de acuerdo con lo programado en plan de trabajo creado para atender las instrucciones de la OA, finalizando el mes de octubre de 2021, se atendieron cada una de las instrucciones impartidas por la SFC salvo las relacionadas con el proveedor Pirani, siendo únicamente este hecho el que se encontraba retrasado en su desarrollo y que como se ha probado, no era imputable a la entidad o a su RL.

Anexa como prueba el informe de la Revisoría Fiscal donde, de acuerdo con su revisión, se observa que para el cierre del año 2021, se había cumplido con todos los puntos del plan de trabajo, excepto por el del perfil de riesgo de vinculación, afectado también por el inconveniente con Pirani y frente al cual se planteó una nueva fecha de finalización de acuerdo con el requerimiento de la SFC.

CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho procede a pronunciarse sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO de la siguiente manera:

En efecto, respecto al seguimiento al cumplimiento de la OA emitida por la SFC, es pertinente remitirse a los hallazgos descritos en los subnumerales 4.1 y 4.1.1 del informe de Cumplimiento No 2020104988-0049 del 21 de febrero de 2022, que permiten determinar que la RL de Movii no adelantó una conducta diligente en su condición de miembro de la estructura organizacional del SARLAFT de la SEPDE, omitiendo efectuar de manera oportuna la implementación de las instrucciones solicitadas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

por la SFC en la OA, lo cual implicó un retraso en la manera de atender dichas instrucciones de forma inmediata y efectiva observando para el efecto, los límites de tiempo propuestos y previamente acordados.

Dentro de la presente actuación administrativa aparece plenamente probado el hecho de que la RL, incurrió en extensiones de tiempo unilaterales, que afectaron directamente la aplicación de los ajustes requeridos en la estructura del SARLAFT de la Entidad Vigilada en el plazo establecido, haciendo que el cumplimiento de algunas instrucciones se prorrogara hasta en 408 días desde la emisión de la OA, es decir 1º de julio de 2020.

Tal y como se indicó en el acto de Formulación de Cargos y frente a lo cual la investigada omitió referirse en su escrito de descargos, la SFC pudo evidenciar en los numerales 4.1.1.1 al 4.1.1.8 del Informe de Cumplimiento No 2020104988- 049 del 21 de febrero del 2022, el que se insiste fue trasladado, una cronología de envío de información que da cuenta de dichos retardos.

Al respecto, no podemos perder de vista que el literal k) del artículo 72 del EOSF, establece que los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y funcionarios de las Entidades Vigiladas, deben obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio al interés público de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política, para lo cual tienen la obligación legal de abstenerse de incumplir o retardar las instrucciones, requerimientos u órdenes que señale la SFC.

Además, luego de efectuar el análisis de las pruebas que obran dentro de la presente actuación administrativa como son los anexos 3 a 5, esto es: matriz de riesgos, Manual SARLAFT del 2021, el informe de la revisoría fiscal para el cierre del año 2021, se pudo determinar lo siguiente:

En relación con el seguimiento efectuado por parte de la SFC al cumplimiento de la OA impartida el 1º de julio de 2020, el plazo perentorio para atender en totalidad las instrucciones fijadas por este órgano de supervisión era el 9 de noviembre del mismo año. Ahora bien, se evidencia, de las revisiones realizadas a la documentación suministrada por la RL, que no se estaba dando el cumplimiento integral a dicha OA, pues la matriz de riesgo no identifica eventos de LA/FT al presentar causas del riesgo, básicamente debilidades o fallas operativas, afectando de esta forma la debida gestión del riesgo LA/FT como quiera que la etapa de medición SARLAFT no se encontraba implementada según las instrucciones dadas por la SFC en la OA.

Así mismo luego de verificar el informe del Revisor Fiscal para el cierre del 4 trimestre de 2021, el mismo menciona lo siguiente:

“(…) En atención al requerimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia con radicación 2020104988-026-000 del 7 de julio de 2021, en donde se realiza el seguimiento a los informes de avance para el ajuste del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, a continuación, describo los procedimientos generales con corte al 31 de diciembre de 2021 sobre la revisión efectuada por la Revisoría Fiscal al avance de implementación de los planes de acción y al cronograma definido por la administración de Movii S.A.:

“(…)

Adicional a ello, en indagaciones con la administración, evidenciamos que esta en proceso de cierre el 4.9 Perfil de riesgo de vinculación, puesto que, se encuentran en un proceso de definición de variables e implementación del perfil de riesgo de vinculación a través de Pirani AML Suite, el cual estará implementado en su totalidad en el mes de marzo del 2022.

Recomendación:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- *Implementar el perfil de riesgo en los plazos estipulados de acuerdo a la ejecución de su cronograma”.*

Por lo tanto, es claro del análisis de las pruebas que el cronograma de actividades previsto para el cumplimiento de la OA, no se encontraba debidamente implementado dentro de los tiempos requeridos, situación que expuso a la Entidad Vigilada a un riesgo de LAFT al no contar en su estructura SARLAFT con la implementación de los elementos esenciales para prevenir su materialización, pues adelantaba operaciones en el mercado financiero con la presencia de dichas falencias estructurales.

Recordemos, además, que fue sólo hasta el 20 de diciembre de 2021 que la RL presenta la culminación de algunas de estas actividades, incumpliendo plazos establecidos por este órgano de supervisión, así como las diferentes prórrogas unilaterales establecidas por la misma RL, aspectos a los cuales omite referirse la investigada de forma puntual, limitándose a indicar que en ningún momento las respuestas enviadas fueron objeto de imprecisiones como lo afirma la SFC. Y que para la época de los hechos Movii, adelantaba las tareas solicitadas.

Adicionalmente, se reitera el incumplimiento de tres (3) glosas que formaron parte de la OA, soportadas en las evaluaciones realizadas en el proceso de supervisión In Situ efectuado entre el 20 de septiembre y el 15 de octubre de 2021, el cual fue informado con el oficio remitido a la Entidad Vigilada el 8 de febrero de 2022, mediante el radicado No. 2020104988-045, aun cuando la RL ya había informado la culminación de actividades tendientes a cumplir dichas glosas.

Lo anterior, evidencia la presencia de debilidades en las acciones planteadas y desarrolladas frente al cumplimiento de la OA, lo cual permite a la SFC determinar que la RL no adelantó una conducta diligente en su condición de órgano de administración del SARLAFT omitiendo efectuar un debido seguimiento a la OA que le permitiera atender dichas instrucciones de manera inmediata y efectiva.

Por lo tanto, los hechos descritos en el subnumeral 4.1.1 del Informe de Inspección de Cumplimiento Personal - RL No.2020104988-049 del 21 de febrero de 2022, advierte la ocurrencia de una conducta sancionable por parte de MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, en su rol de RL de Movii teniendo como fundamento fáctico un retardo en el cumplimiento de la OA radicada con el No. 2020104988-000-000 del 1 de julio de 2020.

10.2.2.5 Interés jurídico tutelado: Considera MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO que no es posible afirmar que se pusieron en peligro los intereses jurídicos tutelados en la medida en que se expuso a la Entidad Vigilada al riesgo de ser utilizada para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, toda vez que la compañía nunca dejó de cumplir con la normativa aplicable y en esa medida contaba con herramientas para la administración del riesgo mencionado. Allega como prueba el Anexo 6 consistente en la prueba de recorrido realizada con la SFC en la visita sobre los monitoreos que se realizaban manualmente (28092021 -Prueba de Recorrido Monitoreos LAFT).

CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho se pronuncia sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO de la siguiente manera:

Sobre el interés jurídico tutelado:

A partir de los cargos que han sido confirmados en los términos referidos a lo largo del presente acto administrativo, es pertinente recordar que la actividad que desarrollan las Entidades Vigiladas y quienes la representan importa al Estado, razón por la cual, se encuentra sujetos a una regulación especial, pues tiene una connotación que trasciende el simple ejercicio particular de la empresa social, que exige que en el despliegue de su objeto social y desarrollo de su actividad atienda en forma

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

estricta y rigurosa, todos los requerimientos normativos a los cuales está sometida la sociedad y sus administradores.

Por lo tanto, son los propios operadores de los servicios financieros que conocen a cabalidad sus procesos, quienes son los directos responsables de fortalecerlos, como ocurre con el caso de los Representantes Legales, así como de los controles con que se administran los servicios regulados por el estado, evaluando los efectos legales y financieros de la ocurrencia de errores para identificar las vulnerabilidades de los sistemas, y de esta forma reducir los riesgos asociados con dicha actividad. En este sentido, debe aclararse que hablar de riesgos y de su gestión, mediante el fortalecimiento del gobierno corporativo, no surge como una directriz general, sino que constituye una necesidad para prevenir la ocurrencia de los eventos adversos a la consecución de los objetivos de las instituciones y de los organismos de control y supervisión.

Bajo tal orden de ideas, dentro de las previsiones que deben cumplir y acatar estrictamente los Representantes Legales en el ejercicio de sus funciones, se encuentran precisamente el estricto cumplimiento de las normas sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, las cuales resultan de la mayor importancia pues tienen incidencia en forma directa, en el orden público económico, así como en la confianza depositada por el público en el sector financiero y bursátil. Y es por ello que, el incumplimiento o la inobservancia de las obligaciones legales y de las instrucciones impartidas por el Organismo de Supervisión en torno a tal aspecto, como todas y cada una de las conductas censuradas en la presente actuación administrativa, revisten gravedad pues comprometen la reputación y la estabilidad no sólo de la entidad, sino que afectan al sistema del cual éstas hacen parte.

En este sentido, las leyes de intervención del Estado en la economía atribuyen a la SFC competencias policivas con el objeto de vigilar y regular ciertas actividades, cumpliendo así funciones de alta policía administrativa, “con el objeto de limitar el ejercicio de los derechos de los administrados, con la única finalidad de mantener el orden y el interés público definido por el artículo 335 de la Constitución Política”. Así, esta instancia gubernamental se encuentra dotada de amplios poderes coercitivos de carácter instrumental para asegurar que los distintos sujetos que traban relaciones de carácter jurídico en el mercado financiero, o actúan sobre él, se ajusten integralmente a sus disposiciones rectoras, previniendo de esta manera la ocurrencia de situaciones de anormalidad que puedan afectar los intereses de la propia colectividad.

Ahora bien, sobre la importancia de los Sistemas de Administración de Riesgos es pertinente comentar que la administración de riesgos es una parte fundamental de la gobernabilidad corporativa que busca contribuir eficientemente en la identificación, análisis, tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos del negocio. Allí también esta consignada una vital recomendación a los administradores de negocios, la gestión de riesgos debe formar parte de la cultura organizacional.

Así mismo, sobre los argumentos expuestos en este acápite por la RL de Movii, reiteramos lo mencionado en numeral 10.2.1 del presente proveído sobre la materialidad de la conducta desplegada por la misma funcionaria y la puesta en peligro de intereses tutelables por parte de la SFC.

Por lo expuesto, contrario a lo manifestado por la investigada sí es posible afirmar que se pusieron en peligro los intereses jurídicos tutelados en la medida en que se expuso a la entidad por ella representada al riesgo de ser utilizada para el LAFT, toda vez que Movii incumplió con la normativa vigente que establecía los criterios mínimos en las etapas del SARLAFT y en esa medida, precisamente, no contaba con herramientas para adelantar y desarrollar una adecuada administración del riesgo mencionado.

No sobra mencionar que la SFC en la OA calificó la conducta de Movii como negligente y omisiva, constitutiva, además, de una práctica insegura para el ejercicio de la actividad financiera, pues exponía innecesariamente a la Entidad Vigilada a una potencial materialización del riesgo de LAFT, elementos que sirvieron de sustento fáctico y jurídico para la imposición de la OA radicada con el No.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2020104988-009-000 del 1 de julio de 2020. Ahora bien, fue la conducta negligente de la RL, la que contribuyó con el retardo en su cumplimiento, y quien no sólo puso en riesgo a la Entidad Vigilada dada su vulnerabilidad en materia de administración del riesgo de LAFT, sino que también propició que desarrollara su objeto social bajo estas condiciones de práctica insegura.

En este sentido, se pone de presente que las órdenes administrativas impartidas buscan que se suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras; se subsanen los incumplimientos normativos o las situaciones que generen riesgos desde el análisis del supervisor y se adopten las correspondientes acciones de mejora al sistema de administración de riesgos y de saneamiento, que en este caso no se acataron con la celeridad y la oportunidad debidas, precisamente para evitar dentro del mercado financiero la ocurrencia de situaciones que puedan afectar su correcto funcionamiento, dada la importancia de la aplicación de los requerimientos mínimos en materia de administración del riesgo de LAFT.

De otra parte, sobre la prueba de recorrido realizada en la Entidad Vigilada con funcionarios de la SFC el día 23 de septiembre de 2021 sobre “Segmentación de factores de riesgo LAFT” la Comisión de Inspección encontró que la metodología presentada por la Dirección de Riesgos y AML era diferente a la que se había referido en la comunicación del 14 de mayo (Pirani). Ésta nueva metodología consistía en la construcción de modelos clustering por medio del software libre Studio R. Adicionalmente, la Dirección de Riesgos y AML informó en la prueba de recorrido que éstos se encontraban en etapa de modelado con fecha de culminación el 30 de septiembre de 2021.

Ahora bien, según lo argumentado por la investigada en cuanto a que aproximadamente el 98% de los clientes contaban con un depósito electrónico de bajo monto, producto de bajo riesgo, de conocimiento simplificado y con una transaccionalidad no mayor a 8 SMLMV y que los controles se ejecutaban de manera manual a través de macros en Excel, la SFC considera que desarrollar de manera inmediata un monitoreo eficiente de las operaciones de sus clientes, utilizando para ello la plataforma tecnológica de que disponga, le debería permitir ejecutar los procedimientos para el análisis de operaciones inusuales y el reporte de transacciones sospechosas dejando la constancia y trazabilidad de cada una de las operaciones detectadas, así como del responsable de su análisis y los resultados de este proceso. Sin embargo, se presentaron retrasos injustificados y remisión de información inconsistente por parte de la RL de Movii, afectando el seguimiento y monitoreo de las operaciones de sus clientes.

Por otro lado y en lo que corresponde a las actividades derivadas del monitoreo, en desarrollo del proceso de supervisión, se evaluaron aquellos diseñados para la mitigación del riesgo LAFT y se pudo establecer que las señales de alerta definidas en el monitoreo transaccional se limitaban a las operaciones por encima de 3 desviaciones estándar del promedio y no contaban con una adecuada infraestructura tecnológica que le permitiera la automatización del alertamiento, centralización y consolidación de operaciones alertadas e inusuales, aspectos sobre los que igualmente no se atendió la instrucción emitida por parte de la SFC y no hay referencia en los descargos de la investigada.

10.2.2.6 Hallazgos auditoría interna: Expresa MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO en el escrito de descargos que el informe de auditoría interna corresponde a una evaluación realizada en 2018, por lo que para 2019 y 2020, varios puntos allí mencionados ya se encontraban corregidos; por ejemplo, la metodología de identificación y medición de riesgos, el diseño de los controles, los reportes a la UIAF, y los monitoreos LAFT. Allega como prueba el Anexo 7 (Reportes a la UIAF -Manual metodologías de identificación y controles).

En adición a lo anterior, menciona que debe tenerse en cuenta que desde la fecha en la cual se impartieron las instrucciones a través de la OA, se iniciaron todas las actuaciones requeridas con el fin de proceder a realizar la reestructuración de la Dirección de Riesgo y AML, la ampliación de planta activa de recursos humanos para la dirección de SARLAFT, la implementación de estrategias para el robustecimiento de los conocimientos de los trabajadores en prevención de riesgos, la consolidación y centralización de archivos de generación de alertas a través de la herramienta Quick Sight, la

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

incorporación del sistema MetaMap para garantizar la originalidad y tenencia de los documentos de identidad de las personas que desarrollan operaciones con la Entidad Vigilada la presentación de un plan de trabajo que aumente las funciones del QuickSight por medio de la creación de un Dashboard que genere alertas cuando se presenten inconsistencias o vacíos en la información de los clientes de Movii y la mejora en la ejecución de la consulta de contrapartes por medio de la herramienta SQL cada vez que se actualice la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad.

Nos indica que dichas estrategias ya se habían dado a conocer a la SFC a través de la respuesta administrativa con radicado 2022033039-000 del 16 de febrero de 2022.

Concluye que, conforme a lo expuesto en precedencia, su actuar no solo fue diligente, sino que también se ajustó a los preceptos de buena fe y lealtades exigibles en su calidad de administradora de Movii. Además, que las actuaciones desplegadas por ella para la adopción de las instrucciones impartidas por la SFC fueron oportunas, ágiles, eficientes y en observancia de la normativa aplicable. Y que por tanto, todas y cada de una de las instrucciones impartidas fueron observadas, se adelantaron los procesos requeridos para su cumplimiento y se implementaron dentro de tiempos razonables atendiendo a su naturaleza.

Igualmente, reitera que en todo momento se le informó a la SFC el avance del cumplimiento de las instrucciones impartidas en la OA, sin ocultar detalles y siendo absolutamente transparentes en el proceso adelantado, incluyendo información sobre las demoras presentadas en el proceso y que eran inherentes al mismo dada su magnitud. Allega gráficos en donde considera que se puede observar cada una de las instrucciones impartidas por la SFC, su nivel de cumplimiento, el tiempo que tomó su implementación y las razones de la demora en su implementación cuando a ello hubiere lugar. Además, allega como prueba el Anexo 8 (Informe de seguimiento al Cronograma).

CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho se pronuncia sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO de la siguiente manera:

Inicialmente debemos poner de presente que fue la Auditoría Interna quien detectó y estableció la presencia de serias debilidades en la estructura de administración de riesgos de LAFT en la Entidad Vigilada, como fueron precisamente las falencias en las etapas de identificación, medición, control y monitoreo; en el conocimiento del cliente; en la documentación del SARLAFT; en la revisión periódica del sistema y en los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF-; hechos que sirvieron de sustento para el proceso de supervisión “Extra Situ” que la SFC adelantó a Movii y que condujeron a la adopción de una medida de supervisión.

Ahora bien, reitera la investigada que en todo momento se le informó a la SFC el avance del cumplimiento de las instrucciones impartidas en la OA, sin ocultar detalles y siendo absolutamente transparentes en el proceso adelantado, incluyendo información sobre las demoras presentadas en el proceso y que eran inherentes al mismo, dada su magnitud. Allega gráficos en donde considera que se puede observar cada una de las instrucciones impartidas por la SFC y su nivel de cumplimiento, en el Anexo 8 (Informe de seguimiento al Cronograma). Cabe precisar que esta información corresponde al 5 de abril de 2022, reiterando que no son hechos materia de análisis bajo la presente actuación administrativa sancionatoria pues no hacen parte del período de corte del informe de inspección personal como hallazgos que soportan el acto definitivo sancionatorio que ahora nos ocupa.

Sobre el particular, se reitera que tal y como se desarrolla en los subnumerales 4.1 y 4.1.1 del Informe de Cumplimiento No. 2020104988-049 del 21 de febrero de 2022, la RL de Movii retardó el cumplimiento de las instrucciones dispuestas en la OA radicada con el No. 2020104988-000 del 1 de julio de 2020, por cuanto de las revisiones realizadas a la documentación suministrada por la misma

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RL, se pudo establecer que no se estaba dando el cumplimiento integral al cronograma de actividades propuesto para el efecto, lo que hizo que se replantearan o diseñaran nuevas actividades en fechas posteriores a las acordadas, aspectos que ya fueron planteados en otros acápite del presente acto administrativo definitivo y que por tanto reiteramos las consideraciones ya expuestas.

De otra parte, nos indica que algunas estrategias ya se habían dado a conocer a la SFC a través de la respuesta administrativa radicada con el No. 2022033039-000. Sobre el particular, es preciso indicar que la investigada, en los argumentos analizados en este acápite, se limita a efectuar referencias a hechos y actividades posteriores que requiere adelantar la Entidad Vigilada en la fase de implementación y cumplimiento de las instrucciones relacionadas con los hallazgos del riesgo LAFT, y de Gobierno Corporativo detalladas en los numerales 6.1 y 6.2., de la OA radicada con el No. 2022033039-000-000 del 16 de febrero de 2022.

Así mismo, la RL Movii mediante comunicación radicada ante la SFC con el No 2022033039-11 del 11 de marzo de 2022, anexó un plan de trabajo diseñado con el fin de subsanar las debilidades detalladas por la SFC, atendiendo a cada una de las órdenes en materia de riesgo de LAFT y Gobierno Corporativo, de acuerdo con la OA impartida y adicionalmente, adjuntó el acta respectiva de Junta Directiva No. 76 donde se evidencia la aprobación del mismo, en aspectos como son: La reestructuración de la Dirección de Riesgo y AML; ampliación de planta activa de recursos humanos para la Gerencia de SARLAFT; implementación de estrategias para el robustecimiento de los conocimientos de los trabajadores en prevención de riesgos, mejoramiento de los recursos tecnológicos mediante la consolidación y centralización de archivos, la incorporación del sistema MetaMap para garantizar la originalidad y tenencia de los documentos de identidad de las personas que se van a registrar. Todos estos aspectos, actividades, gestiones y desarrollos no son objeto de debate dentro de la presente actuación administrativa pues obedecen a una cronología temporal que no hace parte de los hechos que soportan la imputación de los cargos efectuados de forma particular y concreta a la RL de Movii, para el periodo de corte del proceso de inspección personal.

Ahora bien, respecto a la manifestación de la RL en cuanto a que desde la recepción de la OA, la Entidad Vigilada tuvo ajustes en su estructura organizacional, creando dos cargos adicionales a los existentes y la aprobación de un presupuesto propio para la contratación de un proveedor que diera solución a la implementación de la segmentación SARLAFT, es pertinente mencionar que luego de evaluar las pruebas contenidas en los anexos 7 y 8 como: son los reportes a la UIAF -Manual metodologías de identificación y controles y el informe de seguimiento al cronograma presenta fecha del 5 de abril de 2022, es posible determinar que los ajustes se mencionan en el *"INFORME DE GESTIÓN PLAN DE TRABAJO SFC GERENCIA SARLAFT"*, el cual describe actividades por desarrollar en Movii, en aspectos referentes a los ajustes en la estructura SARLAFT de la Entidad Vigilada a efectuarse a lo largo del año 2022. Sobre estos hechos omitiremos efectuar comentarios adicionales como quiera que no corresponden al período objeto de análisis dentro de la cronología de la presente actuación administrativa.

10.3 INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA ENTIDAD VIGILADA EN MATERIA DE SARLAFT

Respecto del segundo cargo, MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO expresa en el escrito de descargos lo siguiente:

10.3.1 Garantizar que la plataforma tecnológica cumpla con los criterios y requisitos mínimos: Sostiene que a partir del 1º de octubre del 2021 se implementó en Movii, la automatización del monitoreo transaccional de los clientes a través de la herramienta Quick Sight y que por lo tanto, para dicha fecha, el proceso manual del cargue de información que se hacía a través de una macro en Excel, fue sustituido por el área de TI-Data de la compañía, logrando parametrizar el monitoreo transaccional del SARLAFT en dicha herramienta, la cual funciona con el lenguaje de programación SQL, lo que en su entender, permite parametrizar adecuadamente el alertamiento LAFT sobre las transacciones de los clientes, de manera consolidada.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Adicionalmente, afirma que la implementación de tal herramienta permitió no solo mejorar el proceso de forma automática, sino que redujo a un (1) archivo la generación de alertas, optimizando su periodicidad de semanal a diario y permitiendo la centralización de la información. Así mismo, agrega que las alertas diarias son almacenadas en Quick Sight y los archivos de trabajo sobre éstas son custodiados por la unidad SARLAFT de Movii, en la carpeta almacenada en drive, cumpliendo los controles de seguridad tales como evitar el ingreso a personal diferente al equipo SARLAFT y el respaldo de la información generando back ups periódicamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirma que respecto al monitoreo transaccional diario y la generación de alertas cumple de manera adecuada y oportuna la automatización de señales de alerta, la consolidación y centralización de las operaciones para gestionar correctamente esta necesidad del SARLAFT.

Así mismo, considera que en Movii, se adelantaron las siguientes actividades:

- (i) Cambios en el proceso de registro, usando la tecnología del proveedor MetaMap quienes permiten realizar controles para garantizar la originalidad y tenencia del documento sobre la persona que se va a registrar; la validación de la originalidad del documento tanto en el registro de menores de edad como para los demás clientes con otros tipos de documento, en este sentido, expone que no se realizará un control diferenciado para menores de edad, ya que el control se estandariza para todos los clientes que se registren por la App de Movii, por lo que una vez identificadas las fallas con el proveedor Adotech, Movii tomó las respectivas medidas, cambiando al nuevo proveedor MetaMap
- (ii) Cambió su estrategia, la cual fue evaluada por el comité de riesgo de la Junta Directiva, donde se planteó realizar la segmentación in house a través de R Studio por los cuatro factores de riesgo.
- (iii) Planteó un plan de acción cuyo propósito es identificar los problemas de calidad y poblamiento de data mediante la creación de dos Dashboard en QuickSight.
- (iv) Se redefinió la manera de actuar para atender la instrucción de la circular 22 del 2017, para que de forma directa y ágil se consulte a todas las contrapartes de Movii a fin de identificar si las personas que ingresan a las listas vinculantes se encuentran relacionadas con la empresa. Adicionalmente, desde el 1º de junio del 2021 Movii, solicitó a la SFC incluir la dirección de correo electrónico riesgos@movii.com.co en la lista de correos a los cuales se les notifica la inclusión de nuevas personas a la lista de CSNU.

CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho se pronuncia sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO de la siguiente manera:

Inicialmente, debemos ser enfáticos en manifestar nuevamente que los argumentos expuestos en este acápite por la investigada se refieren a la comunicación radicada ante la SFC con el No 2022033039-11 del 11 de marzo de 2022, con la cual se anexó el plan de trabajo diseñado con el fin de subsanar las debilidades detalladas por la SFC, atendiendo a cada una de las órdenes en materia de riesgo de LAFT y Gobierno Corporativo.

En consecuencia, reafirmamos que los hechos posteriores que ejecute la RL de Movii dentro del cumplimiento del cronograma de trabajo para llevar a cabo los ajustes pertinentes en materia de SARLAFT y Gobierno Corporativo, no sirven de sustento para aclarar, modificar o revocar el cargo objeto de sanción, puesto que la conducta desplegada por la RL objeto de reproche se refiere al periodo de corte del proceso de inspección personal antes citado.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No obstante lo anterior, debemos precisar que para la SFC es indispensable la observancia y cumplimiento permanente de las condiciones legales mínimas establecidas en el Capítulo IV, Título IV de la Parte Primera de la CBJ, vigente para la época de los hechos, en especial lo referente a contar con el debido soporte en recursos tecnológicos que le permitieran gestionar de manera ágil, eficiente y segura el riesgo de LAFT, aspectos que debieron ser objeto de priorización dentro del rol de RL para evitar que la Entidad Vigilada estuviera expuesta a una potencial materialización del riesgo de LAFT, conducta diligente que omitió adelantar la RL de Movii por cuanto:

Para la época de los hechos objeto de sanción, esto es entre el 1º de julio de 2020 y el 20 de diciembre de 2021, la SFC sí pudo determinar que la RL de Movii omitió adelantar una conducta diligente frente a sus deberes, pues la tecnología y los sistemas implementados no garantizaban la adecuada administración del riesgo de LAFT, en los aspectos que tienen que ver con: (i) las fallas identificadas en el servicio contratado con Adotech para el control de biometría facial; (ii) los retrasos evidenciados con el proveedor Pirani, los cuales afectaron el diseño de las metodologías para la segmentación, el desarrollo de la segunda y tercera fase del proyecto de segmentación, perfil de clientes y señales de alerta, respectivamente; (iii) las debilidades identificadas en la calidad y poblamiento de la información contenida en las bases de datos; y, (iv) el cruce manual de la base de datos con las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas – CSNU .

En efecto, la Entidad Vigilada no contaba con las herramientas tecnológicas necesarias para gestionar adecuadamente el riesgo de LAFT, pues si bien se había contratado el proveedor PIRANI AML para el desarrollo de la segmentación de todos los clientes y la generación de alertas con monitoreos automáticos, fue a raíz de los problemas que se observaron con este proveedor, que se le requirió remitir los soportes del seguimiento realizado al contrato efectuado con el mismo, y en su respuesta suministró correos mediante los cuales se había realizado dicho seguimiento, evidenciando mediante la revisión de los mismos, la falta de gestión por parte de la RL, para dar solución oportuna al inconveniente presentado (se encuentran relacionados en el numeral 4.1.1 del informe de Cumplimiento personal, radicado con el No.2020104988-049 del 21 de febrero de 2022).

Se debe retomar lo mencionado en el mismo informe de inspección en cuanto a que la RL indique el motivo por el cual no se había dado la ejecución de actividades para dicho cumplimiento, se debía a las decisiones adoptadas por el Oficial de Cumplimiento, aspecto que no puede aceptar la SFC como descargo, más teniendo presente que la función en materia de incorporar recursos tecnológicos a la estructura SARLAFT de la entidad recaía directamente en MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO. Es además reprochable que el Oficial de Cumplimiento sí había solicitado apoyo previamente sobre el fortalecimiento de la citada herramienta, sin que se adelantaran actos diligentes por parte de la RL para adecuarlos o mejorarlos. Además, cabe resaltar que tales correos electrónicos indican que los inconvenientes presentados no corresponden a la falta de gestión por parte del proveedor, sino que se debían a la falta de calidad en la información, por la presencia de errores y datos incompletos en la Base de Datos de la Entidad Vigilada, todos estos aspectos que debieron ser objeto de mejora por parte de la RL dadas las funciones a su cargo.

No sobra mencionar que la SFC evidenció para el periodo objeto de inspección, aspecto que consta en el informe de inspección antes anotado, que para el proceso de la vinculación de menores de edad, el control asociado a la autenticación facial suministrado por Adotech, no funcionaba y por ende, no estaba siendo debidamente implementado, aspecto fundamental para el adecuado conocimiento del cliente y mediante el cual se obtiene la información necesaria para iniciar relaciones contractuales o legales con el potencial cliente, así como la verificación de la información necesaria, en particular con su identidad, lo que denota a su vez la falta de seguimiento e interés por parte de la RL para subsanar la deficiencia presentada.

Sin olvidar que la Comisión de Inspección pudo establecer que operativamente para el desarrollo de los monitoreos contemplados en la gestión de riesgo LAFT, los funcionarios a cargo debieron tener una mayor dedicación a dicha labor de seguimiento de operaciones, aunado al hecho que del resultado

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

proveniente de estos alertamientos, se generaban un número importante de archivos que no les dejaba cumplir con la exigencia de consolidar y centralizar las operaciones objeto de análisis.

Los anteriores aspectos permiten concluir que Movii no contaba con una herramienta robusta que garantizara la automatización de señales de alerta, la consolidación y centralización de las operaciones, aunado a la falta de seguimiento de las operaciones inusuales, toda vez que no se observó la oportunidad en la gestión de aquellas operaciones reportadas en el periodo objeto de evaluación.

En cuanto a lo afirmado por la investigada, acerca de que el monitoreo transaccional diario y la generación de alertas era un desarrollo in house que cumplió de manera adecuada y oportuna la automatización de señales de alerta, la consolidación y centralización de las operaciones para gestionar correctamente esta necesidad del SARLAFT, se reitera que en el numeral 4.1.3 del Informe de Cumplimiento número 2021164637-103 del 11 de febrero de 2022, se determinó que la Entidad Vigilada en relación con las herramientas tecnológicas que soportan el SARLAFT de Movii, conservaba en archivos independientes, el registro para cada uno de los monitoreos que adelantaba la Entidad Vigilada, propiciándose un riesgo en la consolidación electrónica de las operaciones de los usuarios, existiendo un alto porcentaje de procesos, manualidad en la custodia y aseguramiento de la información, al pasar de la descarga de las transacciones generadas por los clientes, desde el aplicativo Quicksight, para luego cargar esta información para la ejecución de una macro en Excel.

Por lo anterior, se concluye que la RL no cumplió con los deberes establecidos en el subnumeral 4.2.4.2.4. que consisten en garantizar que la plataforma tecnológica, cumpla con los criterios y requisitos establecidos, y proveer los recursos técnicos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT, en los términos del Capítulo IV, Título IV de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica vigente para el período de corte del proceso de inspección.

10.3.2 Proveer el recurso humano necesario para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT. La RL indica en el escrito de descargos que en atención a su crecimiento histórico y los requerimientos normativos que le son aplicables, Movii de manera constante ha robustecido sus equipos internos, y su planta de colaboradores es hoy la más grande de su historia desde el momento en que recibió la habilitación como SEPDE. En línea con lo anterior, expresa que durante el mes de noviembre se procedió a realizar una reestructuración de la Dirección de Riesgo y AML, con el objetivo de aumentar la planta de personal mediante la división por áreas, para fortalecer y robustecer cada sistema de administración de riesgo.

Adicionalmente, indica que se amplió la planta activa del recurso humano necesario para la Dirección SARLAFT a fin de atender y administrar el riesgo LAFT de acuerdo con su tamaño, número de clientes y cantidad de transacciones y allega un gráfico. Agrega que la Junta Directiva, en su sesión del 22 de febrero de 2022, designó a una funcionaria para ocupar en adelante el cargo en mención, que dicha persona asumió desde esa fecha la nueva Gerencia de SARLAFT, para de esta forma reforzar el cumplimiento de los requisitos de segundo nivel jerárquico, autoridad y toma de decisiones exigido por la normatividad.

Así mismo, señaló que el área de SARLAFT dejó de pertenecer a la Gerencia de Riesgo y Cumplimiento para convertirse en una Gerencia totalmente autónoma y dependiente directamente de la Junta Directiva. Allegó un gráfico al respecto. Adicionalmente, puso de presente que, en la Junta Directiva del 22 de febrero de 2022, fue aprobada la nueva estructura de la Gerencia de SARLAFT, mediante la contratación de un nuevo director, dos analistas y dos auxiliares para robustecer el sistema interno en la materia.

Afirma la RL en su defensa que Movii ha asumido el compromiso de fortalecer su sistema de administración del riesgo LAFT, de manera permanente e ininterrumpida durante los últimos años, mediante la contratación de un mayor número de personas, y la suma de perfiles experimentados en

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

su equipo interno, dotándolos de la independencia y capacidad de decisión necesaria para el desarrollo de sus funciones.

CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho se pronuncia sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO de la siguiente manera:

Conviene reiterar nuevamente que la RL de Movii mediante comunicación radicada ante la SFC con el No 2022033039-11 del 11 de marzo de 2022, anexó el plan de trabajo diseñado con el fin de subsanar las debilidades detalladas por la SFC, atendiendo a cada una de las órdenes en materia de riesgo de LAFT y Gobierno Corporativo, de acuerdo con la OA impartida y adicionalmente, adjuntó el acta de la sesión de la Junta Directiva No 76 donde se evidencia la aprobación del mismo respecto de proveer el recurso humano necesario para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT, hechos posteriores al reproche efectuado por la SFC sobre la conducta negligente de la RL de Movii, esto es, entre el 1º de julio de 2020 y el 20 de diciembre de 2021 y que ahora pretende argumentar para enervar el cargo endilgado.

En consecuencia, los hechos posteriores que ejecute la RL de Movii dentro del cumplimiento del cronograma de trabajo para llevar a cabo los ajustes pertinentes en materia de SARLAFT y Gobierno Corporativo, no sirven de sustento para aclarar, modificar o revocar el cargo objeto de sanción.

Ahora bien, esta Superintendencia debe manifestar que los sistemas de administración de riesgos han sido estructurados bajo criterios y exigencias mínimas que esencialmente les permiten a las Entidades Vigiladas limitar la potencial materialización de los riesgos asociados al desarrollo de las actividades para las que fueron autorizadas, evaluando de esta forma la vulnerabilidad y efectividad de los mismos. Para ello, es de vital importancia que las entidades, por conducto de las personas encargadas de hacerlo, asuman esfuerzos propios que fortalezcan sus equipos de trabajo internos que garanticen con suficiencia los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT, aspecto relevante que les sirve de base para la toma de decisiones razonadas bajo un adecuado ambiente de gestión del riesgo de LAFT.

En este sentido, retomando los hechos objeto de sanción descritos en los subnumerales 4.1.2 y 4.3 del Informe de Cumplimiento radicado No.2021164637-103 del 16 de febrero de 2022, se pudo determinar que la estructura interna de la Dirección de Riesgos y AML, que da soporte a la Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la SEDPE, en ese entonces estaría integrada por cuatro (4) empleados así: un (1) Oficial de Cumplimiento Principal, un (1) Coordinador de Riesgo y AML (Oficial de Cumplimiento Suplente), un (1) Coordinador de Riesgo y Analítica y un (1) Analista de Riesgo.

De igual forma, la SEDPE suministró las hojas de vida de los funcionarios que conforman el área, junto con la descripción de sus funciones y perfiles, asimismo, la información sobre los comités en los que participa el Oficial de Cumplimiento y un estudio técnico de las cargas laborales de la Dirección de Riesgos y AML, el cual fue solicitado con el fin de evaluar la suficiencia del personal de dicha dirección. Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo corroborar que el Oficial de Cumplimiento Suplente, la Auxiliar de Riesgos y el Coordinador de Riesgo y AML, tienen asignadas un importante número de funciones adicionales a las propias del riesgo LAFT.

Ahora bien, específicamente en el monitoreo transaccional de los clientes por cada uno de los productos ofrecidos, se observó una alta carga operativa (manualidad) en cuanto a los diferentes procesos que deben realizar los funcionarios ya relacionados, tales como consolidación de operaciones transaccionales, creación de bases de datos, entre otros.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En el trámite de autorización de constitución, la Entidad indicó que contaría con sistemas de administración de riesgos diseñados e implementados conforme a su estructura, tamaño, objeto y dimensión, que se adaptarían a la normatividad que le resultare aplicable. Pese a esta premisa, no fue posible evidenciar para la época de los hechos de un robustecimiento o fortalecimiento de las estructuras relacionadas con la función de gestión de riesgos y de cumplimiento consistentes con el crecimiento significativo que ha experimentado la SEDPE en sus cifras de negocio sobre número de usuarios y transacciones, volúmenes transados, así como el ofrecimiento de nuevos productos y canales, aspectos sobre los cuales la RL omitió adelantar una gestión eficaz y diligente para proveer de los recursos necesarios a la Entidad Vigilada para llevar a cabo una adecuada gestión del riesgo de LAFT.

Adicionalmente debemos manifestar que la reestructuración mencionada por la investigada que, según indicó, llevó a cabo en el mes de noviembre de 2021, no cuenta con aprobación de la Junta Directiva y tampoco obedece a los requerimientos de personal que fueran necesarios para adelantar una adecuada y diligente gestión de riesgo de LAFT. En tal sentido, no tiene efectos directos sobre la estructura SARLAFT de la Entidad Vigilada, pues para la SFC, el grupo de personas que integren el área de administración de riesgo LAFT debe estar acorde con la dinámica de productos y servicios ofrecidos por Movii en el mercado financiero y los riesgos asumidos por la misma en el desarrollo de su objeto social, el cual deberá estar soportado en un estudio técnico que lo fundamente y que igualmente deberá ser conocido y aprobado por la Junta Directiva.

Por lo tanto, se puede concluir que MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO como RL de Movii, omitió su deber de proveer lo necesario para que la entidad contara con suficiencia de recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT, lo cual implicó que dicha vigilada no contara con una unidad de cumplimiento acorde con el riesgo al que se encontraba expuesta, teniendo en cuenta el mercado al cual focaliza el desarrollo de su objeto social, así como el tamaño de la misma, su número de clientes y de transacciones.

Así mismo, en el ejercicio de supervisión no fue posible evidenciar un robustecimiento o fortalecimiento de las estructuras relacionadas con la función de gestión de riesgos y de cumplimiento consistentes con el crecimiento significativo experimentado por la Entidad Vigilada en sus cifras de negocio. Lo anterior se relaciona con cargas de trabajo significativas sobre los funcionarios que gestionan y administran el riesgo LAFT y las responsabilidades existentes sobre el Oficial de Cumplimiento en aspectos de cumplimiento normativo.

De igual forma, específicamente en el monitoreo transaccional de los clientes por cada uno de los productos ofrecidos, se observó una alta carga operativa (manualidad) en cuanto a los diferentes procesos que debían realizar los funcionarios ya relacionados, tales como consolidación de operaciones transaccionales, creación de bases de datos, entre otros.

Por lo anterior, se concluye que la RL no cumple con el deber establecido en el subnumeral del 4.2.4.2.5, que consiste en proveer el recurso humano necesario para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT, en los términos del Capítulo IV, Título IV de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica vigente para el período de corte del proceso de inspección.

10.3.3 Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento: Expresa MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO en el escrito de descargos que la SFC no considera las actuaciones adelantadas por ella y que el Oficial de Cumplimiento está dotado de la jerarquía necesaria dentro de la organización para impartir directrices que le permitan el adecuado cumplimiento de sus deberes, además de contar con la capacidad decisoria en las materias a su cargo, proveniente tanto de las funciones descritas en manual de funciones como de la autorización otorgada por la Junta Directiva, instituyendo este cargo como de segundo nivel jerárquico. Y que por tanto el cargo en sí mismo cuenta con la autoridad suficiente y la capacidad decisoria necesarias para el desarrollo de sus actividades, por lo que considera que la falta de respuesta a un correo no puede servir de sustento del cargo. Además, dentro de las actuaciones adelantadas por la RL para la época de los hechos se tiene

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

que atendiendo las necesidades manifestadas por el Oficial de Cumplimiento se aprobó la nueva estructura y el presupuesto para el proveedor de la segmentación.

CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho procede a pronunciarse sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO de la siguiente manera:

No sobra mencionar que la SFC considera de primordial relevancia que los máximos órganos de la estructura organizacional de una Entidad Vigilada, como en el caso objeto de estudio, la RL cumpla a cabalidad sus funciones en materia de administración de riesgo de LAFT, es decir de manera efectiva, eficiente y oportuna puesto que sus decisiones deben servir de apoyo al área de cumplimiento, para prevenir a la entidad de la posibilidad de pérdida o daño por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones, como instrumento para el lavado de activos o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda a través de ella, el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades, cumpliendo un papel fundamental de apoyo a las gestiones adelantadas por el área de cumplimiento de la entidad a cargo del Oficial de Cumplimiento.

Prueba de lo anterior, es precisamente el hecho que la Comisión de Inspección con el fin de verificar el seguimiento realizado al contrato con el proveedor Pirani, le solicitó a la Entidad Vigilada remitir la siguiente información: "Remitir soportes del seguimiento que ha realizado la SEDPE al cumplimiento del contrato y acciones adelantadas en caso de incumplimiento".

En respuesta de lo anterior, la RL de Movii remitió los correos mediante los cuales se realizó el seguimiento a las actividades que se estaban adelantando con el proveedor Pirani y se observó que el Oficial de Cumplimiento en repetidas ocasiones (28 y 31 de mayo de 2021 y 1 de junio de 2021), transmitió su preocupación a MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, solicitando su colaboración, por la falta de calidad, completitud en la información, errores y datos incompletos en la Base de Datos y por la falta de prioridad dada a la solución de este inconveniente, lo cual generó retrasos en cumplimiento de la OA impartida por la SFC.

Ahora bien, para la SFC resulta inadmisibles lo argumentado por la investigada sobre la supuesta responsabilidad directa del Oficial de Cumplimiento de proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT, teniendo en cuenta que dicha función recae precisamente en el rol del RL de Movii, tal y como lo exige la normatividad SARLAFT vigente para la época de los hechos, teniendo en cuenta, además, que los aspectos mencionados propenden por una eficaz y eficiente administración del riesgo de LAFT, lo cual finalmente redundaría en prevenir el ingreso y salida de recursos relacionados con actividades ilícitas en la Entidad Vigilada.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observó una manifiesta negligencia en la gestión adelantada por parte de la RL ante la falta de respuesta oportuna a los problemas de calidad de la información reportados en las bases de datos al proveedor Pirani, al punto que entró como contingencia, el Plan B para el diseño de las metodologías de segmentación de los factores de riesgo.

Por lo tanto, en el caso bajo estudio, la investigada tenía la calidad de RL para la época de los hechos y por ende, de administrador social, lo cual permite establecer que dentro de la organización empresarial cumplía un rol específico definido en los estatutos sociales con competencias funcionales concretas, a las cuales no podría abstraerse de velar por su cumplimiento, justamente para facilitar el logro de los objetivos en materia de administración del riesgo de LAFT, y más aun de prestar el apoyo al Oficial de cumplimiento en el desarrollo y ejecución de sus funciones y competencias.

Lo anterior, permite evidenciar una negligencia en la correcta observación de sus deberes por parte del RL para prestar un efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento, faltando así al

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

deber establecido en el subnumeral 4.2.4.2.6, que consiste en prestar dicho acompañamiento, en los términos del Capítulo IV, Título IV de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica vigente para el período de corte del proceso de inspección.

10.3.4 Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y confidencialidad de la información allí contenida.

MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO manifiesta como argumento de descargo que la información del usuario y de sus transacciones generada por el Core Mahindra se almacena en la base de datos Oracle 12C Enterprise Edition y que toda la información confidencial se encontraba encriptada y cifrada, por lo tanto, ninguna otra aplicación podía conectarse a esa base de datos, la cual puede además configurarse en tiempo real con dos bases de datos de réplica con tecnología Oracle Active Data Guard, de las cuales una se utiliza para la recuperación de desastres y otra se utiliza para informes a Quicksight y que así mismo cuentan con una conexión VPN segura al servidor de la base de datos para obtener la información.

CONSIDERACIONES DE LA SFC

Con fundamento en los hechos y pruebas que conforman la presente actuación administrativa, este Despacho procede a pronunciarse sobre los descargos y alegatos de conclusión allegados por la MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO de la siguiente manera:

Como se expuso en el subnumeral 4.3 del Informe de Cumplimiento radicado No. 2021164637- 103 del 16 de febrero de 2022, el cual hace parte de la presente actuación administrativa, la documentación suministrada a la Comisión de Visita evidenció para la época de los hechos deficiencias en la información de los clientes personas naturales de depósito de bajo monto y de depósito ordinario, en aspectos tales como incoherencias en las cifras reportadas, duplicidad de datos y en algunos casos es incompleta.

Aunado al hecho mencionado previamente, una situación similar se presentó en la información requerida para dar continuidad al proyecto adelantando con el proveedor PIRANI y que fue manifestada por el Oficial de Cumplimiento a la RL sin que ésta adelantara gestión alguna. De otra parte, se evidenciaron falencias respecto del tratamiento de datos dentro de la estructura SARLAFT de la Entidad Vigilada, aspecto que fue ratificado con la prueba de recorrido realizada por la Comisión de Visita sobre la metodología interna que estaba ejecutando (Plan B) para el desarrollo de la segmentación requerida mediante una de las instrucciones impartidas en la OA, sin que nuevamente, la RL hubiera adelantado actividades tendientes a solucionar dichos inconvenientes en Movii.

Todo lo anterior, lleva a concluir que la RL tampoco estaba cumpliendo con el deber de garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT acreditaran los criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y confidencialidad de la información allí contenida, según lo establecido en el subnumeral 4.2.4.2.7. del Capítulo IV, Título IV de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica vigente para el período de corte del proceso de inspección.

Como conclusión del concepto de violación, MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, en su calidad RL de Movii, debió cumplir con las funciones indicadas respecto de la gestión del riesgo de LAFT. De acuerdo con el resultado del proceso de inspección, se evidenció que tal labor no fue desarrollada con apego a lo exigido, por cuanto de haberla cumplido, se habrían hecho los ajustes necesarios para asegurar la adecuada implementación y funcionamiento del citado sistema, tal como lo exigen los subnumerales 4.2.4.2.4., 4.2.4.2.5., 4.2.4.2.6. y 4.2.4.2.7. Capítulo IV, Título IV, de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica, sobre el SARLAFT vigente para la época de los hechos.

UNDÉCIMO: GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 209, literal a), b) y c) del EOSF están sujetos a sanción los administradores de una institución sujeta a vigilancia de esta Superintendencia cuando “a) Incumplan los deberes o las obligaciones legales que les correspondan en desarrollo de sus funciones”, “b) Ejecuten actos que resulten violatorios de la ley, (...) o de cualquiera otra norma legal a la que éstos en ejercicio de sus funciones o la institución vigilada deban sujetarse” y “c) Incumplan las normas, (...) o instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria -léase Superintendencia Financiera de Colombia- en ejercicio de sus atribuciones, cuando dicho incumplimiento constituya infracción a la ley”.

Ahora bien, según lo dispuesto en el numeral 3, del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, puede imponer las sanciones de carácter administrativo consistentes en: amonestación o llamado de atención, multa pecuniaria, suspensión o inhabilitación para el ejercicio de ciertos cargos en entidades vigiladas por esta Superintendencia, entre otras, con el detalle que se establece en la norma.

Consideraciones finales de MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO sobre la graduación de la sanción

Manifiesta en el escrito de descargos y en los alegatos de conclusión que su actuar como RL de Movii, se adecuó con total apego a las normas, no obedecieron a un actuar negligente, sino que fueron producto de un actuar de buena fe en el que se buscó adoptar de la mejor manera las instrucciones impartidas por la Delegatura, privilegiando en todo momento tal condición frente a otras circunstancias como el tiempo.

Y que en su entendimiento la Superintendencia conoce a cabalidad los actos que se realizaron encaminados a adoptar las instrucciones impartidas por este órgano de control, y que la SFC entendía y aceptaba que a través del mismo se estaba dando cabal cumplimiento a las instrucciones impartidas, por lo que se sorprende que ahora se le acuse de haber desconocido e incumplido las instrucciones de la Superintendencia.

Así mismo, reconoce la existencia de errores en el SARLAFT, pero señala que a la fecha no se han causado daños o perjuicios derivados de las oportunidades de mejora identificadas, por lo que en su entendimiento no ha habido una vulneración al interés jurídico tutelado, y además ha actuado bajo el principio de confianza legítima, de que se estaban cumpliendo adecuadamente las instrucciones de este ente de control. Así mismo, solicita que se tenga en cuenta los criterios de graduación de las sanciones establecidos por el numeral 2 del artículo 208 del EOSF; no obstante efectúa la transcripción de los literales del artículo 52 de la ley 964 de 2005 aplicables a la actividad bursátil.

Finalmente expone que en caso de considerar que no es posible el archivo de la actuación, proceda a imponer un llamado de atención o amonestación

En este orden, atendiendo lo dispuesto en las normas vigentes sobre la aplicación de los criterios para atender la graduación de las sanciones administrativas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, es pertinente mencionar que precisamente atendiendo el debido proceso de la investigada y del derecho de defensa de la misma y con el propósito de imponer una sanción, la SFC considerará los criterios establecidos en el numeral 2° del artículo 208 del EOSF, frente a los cuales es pertinente analizar lo siguiente:

a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con las atribuciones que le señale el presente Estatuto

Inicialmente debemos precisar que un factor fundamental para la gestión de riesgos es la eficacia de los controles institucionales internos, por lo que es prioridad fundamental de los funcionarios encargados de su administración y gestión, la realización de actividades conducentes a disminuir la posibilidad de ocurrencia y la consecuencia de la materialización de los riesgos en las Entidades Vigiladas e implementar mecanismos para la continuidad del negocio, entendiéndose que su

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aplicación se traduce en una de las mejores prácticas que actualmente se llevan a cabo en todo tipo de organizaciones y entidades, en el control y monitoreo de riesgos.

I

Resulta incuestionable bajo los argumentos expuestos y analizados a lo largo de la presente actuación administrativa, que se presentó un peligro a los intereses jurídicos tutelados por esta Superintendencia, toda vez que con los incumplimientos normativos en los que incurrió MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO respecto de sus deberes en la correcta gestión del SARLAFT para la época de los hechos objeto de análisis, estuvo expuesta al riesgo de ser utilizada para el LAFT, poniendo en peligro los intereses jurídicos tutelados por esta Superintendencia.

Por lo tanto, debemos precisar que quienes ostenten el cargo de administradores y ejerzan las funciones propias de dicha investidura en una entidad vigilada por la SFC se encuentran en la obligación de actuar de conformidad con el marco legal que resulte exigible a su conducta dentro de la estructura del ente societario objeto de nuestra inspección y vigilancia, así como de los parámetros de los principios de buena fe, debida diligencia de los administradores, y del interés societario.

Dentro del curso de la presente actuación administrativa, se pudo establecer que la RL de Movii retardó el cumplimiento de las órdenes emitidas por la SFC, contenidas en el radicado No. 2020104988-000-000 del 1 de julio de 2020, para adecuar la estructura del SARLAFT de la Entidad Vigilada a los estándares mínimos exigidos. Este comportamiento configura una conducta negligente, entendida como la ausencia de un comportamiento adecuado en una situación concreta, plenamente exigible, como ocurrió posiblemente en el caso bajo estudio.

Así mismo, MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, en su calidad RL de Movii, omitió cumplir con las funciones indicadas respecto de la gestión del riesgo de LAFT. De acuerdo con el resultado del proceso de inspección, se evidenció que tal labor no fue desarrollada con apego a lo exigido, por cuanto de haberla cumplido, se habrían hecho los ajustes necesarios para asegurar la adecuada implementación y funcionamiento del citado sistema, tal como lo exigen los subnumerales 4.2.4.2.4., 4.2.4.2.5., 4.2.4.2.6. y 4.2.4.2.7. Capítulo IV, Título IV, de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica, sobre el SARLAFT vigente para la época de los hechos.

De igual forma es pertinente recordar que un factor fundamental para la gestión de riesgos es la eficacia de los controles institucionales internos, por lo que es prioridad fundamental de los funcionarios encargados de su administración y gestión, la realización de actividades conducentes a disminuir la posibilidad de ocurrencia y la consecuencia de la materialización de los riesgos en las Entidades Vigiladas e implementar mecanismos para la continuidad del negocio, entendiéndose que su aplicación se traduce en mejores prácticas respecto del control y monitoreo de riesgos en materia de LAFT.

Las omisiones en que incurrió la RL de Movii pusieron en peligro el interés jurídico tutelado por la SFC, por cuanto no puede desconocerse que el ingreso y salida de dineros relacionados con actividades ilícitas en una Entidad Vigilada afecta notoriamente el sistema financiero en general, no sólo por los sentimientos de desconfianza e inseguridad que generan en los clientes y usuarios del sistema, sino también por el desprestigio reputacional que puede sufrir la entidad al estar expuesta a materializar un riesgo de LAFT, teniendo presente que es deber de sus representantes y administradores gestionarlo en debida forma.

Además se debe poner en relevancia que las Entidades Vigiladas, como ocurre con el caso de Movii se encuentran sujetas a un marco de regulación exigente en materia de administración de riesgos, pues tiene una connotación que trasciende el simple ejercicio particular de la empresa social, lo cual requiere que en el desarrollo de su objeto social sus representantes atiendan en forma estricta y rigurosa el cumplimiento de todos los requerimientos normativos a los cuales están sometidas, más aún en términos de importancia de la inclusión financiera a través de las sociedades especializadas en pagos y depósitos electrónicos – SEDPE.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sobre la supuesta aplicación del principio de la confianza legítima debemos mencionar que dentro de la presente actuación administrativa no se considera necesario aplicar dicho principio como quiera la SFC bajo ningún supuesto creó o generó expectativas favorables para la RL de Movii respecto del cumplimiento dado a la OA y menos aún respecto del cumplimiento de los deberes propios del RL en materia SARLAFT, pues lo que resulta evidente es que existían unos deberes normativos propios de su condición y rol de RL frente a la implementación de ajustes a la estructura de administración de riesgo de LAFT en la vigilada y que por el contrario, fue la misma investigada la que con su conducta generó efectos adversos frente a la debida gestión del citado riesgo, pues se apartó precisamente de las obligaciones de actuar de conformidad con el marco legal exigible dentro de la estructura del ente societario objeto de nuestra inspección y vigilancia, así como de los parámetros de los principios de buena fe, debida diligencia de los administradores, y del interés societario

b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar

Sobre este particular, es claro que con la infracción cometida por MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO no tuvo ningún beneficio económico que esta Superintendencia hubiere podido probar.

c) La reincidencia en la comisión de la infracción

MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, no ha sido objeto de sanción por hechos exactamente similares a los que fueron objeto del Pliego de Cargos.

d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia

Por otra parte, procede manifestar que de acuerdo con la documentación que reposa en el expediente, no hay evidencia de que se hubiera presentado resistencia negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Superintendencia.

e) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción, o cuando se utiliza persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos

Igualmente, de acuerdo con la información que reposa en la presente actuación administrativa, se puede afirmar que no existe prueba de que MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, hubiere utilizado medios fraudulentos con propósitos de defraudación u ocultación alguna, lo cual acepta esta Superintendencia.

f) El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes

Sobre este criterio debe señalarse que aunque MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO hubiera propendido por que se cumplieran las normas relativas al SARLAFT, lo cierto es que para el período cuestionado, como está demostrado en la presente actuación, no cumplió con sus deberes en relación con retardar el cumplimiento de las instrucciones, requerimientos u órdenes que señale la SFC sobre las materias que de acuerdo con la ley son de su competencia y con algunas funciones del RL en materia SARLAFT.

No sobra mencionar que la SFC considera de primordial relevancia que los máximos órganos de la estructura organizacional de una Entidad Vigilada, como en el caso objeto de estudio, la RL cumpla a cabalidad sus funciones en materia de administración de riesgo de LAFT, es decir de manera efectiva, eficiente y oportuna puesto que sus decisiones deben servir de apoyo al área de cumplimiento, para prevenir a la entidad de la posibilidad de pérdida o daño por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones, como instrumento para el lavado de activos o canalización de recursos

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda a través de ella, el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

Dentro de la presente actuación administrativa se pudo establecer que la investigada tenía la calidad de RL para la época de los hechos y por ende, de administrador social, lo cual permite establecer que dentro de Movii cumplía un rol específico definido en los estatutos sociales con competencias funcionales concretas, a las cuales no podría abstraerse de velar por su cumplimiento, justamente para facilitar el logro de los objetivos en materia de administración del riesgo de LAFT, frente a lo cual la SFC pudo establecer y demostrar la presencia de una conducta omisiva frente a los mismos.

No obstante lo anterior, la SFC acoge el argumento de la RL en cuanto a que se han tomado medidas tendientes a la corrección de las omisiones planteadas, aumentando los controles sobre las obligaciones reseñadas con el fin de evitar incurrir nuevamente en las mismas, y se ha actuado de forma transparente y abierta ante la SFC, dando las explicaciones requeridas y adoptando las medidas exigidas por dicha entidad.

g) La renuencia o desacato a cumplir con las órdenes impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia

Cabe resaltar que es claro que MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO si bien presentó retardos en el cumplimiento de las instrucciones de la SFC, su conducta no puede calificarse como renuente en esta materia a cumplir con las órdenes e instrucciones impartidas.

h) El ejercicio de actividades o el desempeño de cargos sin que se hubiere posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia cuando la ley así lo exija

Dentro de la presente actuación administrativa MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, no adelantó actividades bajo dicha condición.

i) El reconocimiento o aceptación expreso que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.

Sobre el particular, se hace necesario precisar que MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO no aceptó en algunos apartes de sus descargos la conducta infractora, con lo cual este criterio de graduación no puede tomarse como atenuante del monto de la sanción.

j) La adopción de soluciones a favor del consumidor financiero dentro del trámite de quejas o reclamos, así como la implementación de medidas de mejoramiento como consecuencia de las mismas.

En la medida en que este criterio no es aplicable para el presente asunto, no será tomado en cuenta para efectos de establecer la sanción.

Así las cosas, como consecuencia de la conducta infractora en la que incurrió MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO que hace parte de los cargos formulados y en consideración a lo expuesto, esta Superintendencia estima procedente imponer la sanción que se indica en la parte resolutive del presente acto administrativo, teniendo en cuenta las razones expuestas por la investigada así como los criterios antes citados:

En mérito de lo expuesto, este Despacho

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO. - SANCIONAR CON AMONESTACIÓN a MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.206.564, de conformidad con lo expuesto en la

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

parte motiva de la presente Resolución y en atención a los cargos endilgados por la Superintendencia Financiera de Colombia y los descargos y pruebas aportadas por la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR personalmente a MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO, el texto de la presente Resolución, entregándole copia íntegra de la misma y haciéndole saber que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Financiero de Colombia, el cual se debe interponer personalmente y por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma.

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente acto administrativo se notificará a través de medios electrónicos, en el entendido que MARYOIRY LILIANA ÁVILA RUBIO emitió autorización para efectuar dicha notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

sfc sfc sfc sfc sl
sfc sfc sfc sfc sfc
sfc sfc sfc sfc sl
sfc sfc sfc sfc
sfc sfc sfc sfc sl

FRANCISCO SOTOMAYOR GARCIA

540000-DELEGADO PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (E)

DELEGATURA PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Elaboró:

ARIEL FERNANDO SOLARTE CASTRO

Revisó y aprobó:

--INGREED DENISSE ZAPATA ARIZA